
CIUDADES
EN LA ENCRUCIJADA:
Violencia y poder criminal
en Río de Janeiro, Medellín,
Bogotá y Ciudad Juárez



CRDI

Centre de recherches pour le
développement international

Medellín, octubre de 2014

CIUDADES EN LA ENCRUCIJADA:
Violencia y poder criminal en Río de
Janeiro, Medellín, Bogotá y Ciudad Juárez.

Corporación Región

Carrera 49 N°. 60-50
Teléfono: (574) 2542424
e-mail: corporacionregion@gmail.com
Medellín - Colombia

**Instituto de Estudios Políticos
y Relaciones Internacionales
Universidad Nacional de Colombia**

Carrera 5A N°. 34A - 09
Bogotá - Colombia
PBX (57-1) 7430700

Diseño e impresión
Pregón S.A.S.
Medellín, 2014

Corrección de Estilo:
Sol Astrid Giraldo

ISBN: 978-958-8134-66-6

Contenido

Presentación.....	5
Introducción	9
La paradoja latinoamericana.	
Las ciudades en perspectiva comparada.	9
I. Cocaína y conflicto	14
II. Contenido del poder: “consenso” y violencia.....	25
III. Forma y alcance del poder: la estructura	37
Bibliografía	48
Río de Janeiro: sufrir la violencia, decir la paz.....	49
I. La criminalidad y la violencia en su contexto histórico y social	50
II. Actores colectivos de la violencia en Río de Janeiro	81
III. Las políticas de seguridad pública y las UPP.....	109
Bibliografía.....	116
Medellín en su laberinto	
Criminalidad y violencia en los comienzos del siglo XXI ..	119
I. Medellín y sus transformaciones	121
II. Actores y estructuras delincuenciales: en permanente mutación	130
III. Economía criminal próspera	145
IV. Inserción en el entramado social barrial.....	156
V. Capacidad para incidir en la esfera política	165
VI. En la búsqueda de salidas al laberinto.....	173
Bibliografía.....	178

“Robar, pero no matar”

Crimen, homicidio y violencia en Bogotá..... 185

Primera parte: El homicidio desciende: “no matarás”	191
I. Homicidio en descenso	191
II. Seguridad y ciudadanía: discurso e institución	197
Segunda parte: El crimen abunda: “robar, pero no matar”	204
III. Asimetría y resemantización	204
IV. Características y actores armados.....	207
V. La estructura criminal.....	212
Tercera parte: La violencia se disemina: límites del mandato	222
VI. Enclaves violentos.....	222
VII. Limpieza e identidad	226
VIII. Violencia entre cercanos	234
Bibliografía.....	243

Ciudad Juárez:

Sociedad, criminalidad y violencia trasnacional..... 249

I. El perfil de la ciudad	258
II. Prohibiciones y oportunidades	266
III. Los sinaloenses en Juárez	274
IV. Los sinaloenses en Juárez II	283
V. Necrópolis fronteriza	298
Conclusiones	318
Bibliografía.....	321

MEDELLÍN EN SU LABERINTO¹

CRIMINALIDAD Y VIOLENCIA EN LOS COMIENZOS DEL SIGLO XXI

Ana María Jaramillo²
Max Yuri Gil³

Medellín es una ciudad que ha sido reconocida en la última década por ser un sitio de contrastes, una urbe que sobresale por sus transformaciones, pero que de manera reiterada vuelve a tropezar con los mismos obstáculos, la violencia y el narcotráfico. Aunque no es igual la situación que se experimenta hoy en la ciudad, pues es evidente que no estamos en los mismos niveles de violencia del año 1991, punto de mayor número de homicidios en la historia de la ciudad (6.349 homicidios, 381 por cada cien mil habitantes) ni ante un auge del narcotráfico como el que se vivió en los años 80 y parte de los 90, en la última década se ha puesto en evidencia la pervivencia de una criminalidad que ha adquirido un carácter mafioso, fundado en su capacidad para el ejercicio de la violencia o la amenaza de ejercerla, su inserción social, la diversificación de

1 El presente ensayo es fruto de la labor desarrollada por el equipo conformado en Medellín por la Corporación Región, el cual contó con la valiosa contribución de la socióloga Sandra González en calidad de asistente de investigación.

2 Socióloga. Investigadora Corporación Región. Correo:anitajarami@gmail.com

3 Sociólogo. Investigador de la Corporación Región. Correo:maxgilr@yahoo.com

sus fuentes de obtención de rentas ilegales, los nexos que ha logrado establecer con la economía legal, con la institucionalidad y con sectores sociales y políticos que avalan sus prácticas

Lo anterior no implica una ruptura total con el proyecto que encarnó Pablo Escobar en los años 80. Si bien hay una relación de continuidad en el protagonismo de actores de violencia se observan variaciones en su *modus operandi* sobre todo a partir del momento en que se articulan al proyecto de las Autodefensas liderado por el jefe de la Oficina de Envigado alias Don Berna. Algo similar ocurre con la importancia que han cobrado diversos negocios no solo relacionados con el narcotráfico y con la importancia asignada al dominio territorial.

Sin embargo, es necesario tener presente que la configuración de un poder mafioso no es un fenómeno del todo ajeno a lo que ha ocurrido en otras ciudades del país. Ya desde el año 2005, Gustavo Duncan daba cuenta de los avances logrados por los llamados señores de la guerra provenientes de zonas rurales en la conformación de redes mafiosas en las ciudades, su interés de ejercer un monopolio de la coerción de mercados ilegales y legales y en un nivel superior, la búsqueda de la apropiación del poder político en las ciudades (Duncan, 2005). Aunque Medellín no es un caso representativo de infiltración urbana de los “señores de la guerra”, es factible establecer similitudes con otras ciudades y en lo relacionado con sus impactos en la tercerización de la economía en gran parte debida a los excedentes del narcotráfico, en una expansión del consumo de ciertos bienes y servicios y en los modos de vida de sectores de la población que de diversas formas se benefician con la dinámica económica generada por el narcotráfico.

Tampoco se trata de un fenómeno inédito. Como lo indican estudios relacionados con las transformaciones que a nivel global se han venido produciendo en el crimen organizado y en las mafias, se ha puesto de manifiesto su capacidad para instalarse en el corazón de sistemas políticos y económicos (Gayraud, 2007), diversificar sus operaciones y la búsqueda de influencias en entornos políticos, económicos y sociales basados en su capacidad adquisitiva y poder de coerción (Garzón, 2008), (Garay, 2012). Sin embargo, los

contextos en los cuales se insertan y los impactos que generan no son los mismos. Mientras que en Italia, por ejemplo, la existencia de la mafia cuenta con una larga tradición, en el caso de Colombia es una problemática más reciente y un tema poco investigado, ante el interés otorgado a estudios relacionados con el conflicto armado, aunque el deterioro de la seguridad en las ciudades con el accionar de pandillas, el microtráfico y la extorsión ha contribuido a renovar el interés por abordar estos temas.

El siguiente texto busca dar un fundamento a la hipótesis enunciada en un comienzo a partir del examen de ciertas particularidades de Medellín en relación con sus transformaciones y en el comportamiento de la criminalidad (parte I); la caracterización de ciertos actores de la violencia y criminalidad (bandas, combos, milicias, paramilitares) y su trayectoria a la luz de variaciones en los contextos del conflicto armado y el narcotráfico (parte II); el microtráfico y la extorsión como expresión de su capacidad para diversificar sus rentas ilegales (parte III); su inserción en el entramado social barrial mediante la implantación de controles, diversas formas de victimización e intentos de legitimación como agentes del orden y benefactores de la comunidad (parte IV); su injerencia en la esfera política en relación con las elecciones para la Alcaldía en Medellín en los años 2007 y 2009, y en espacios de participación ciudadana (parte V). Se finaliza con algunas consideraciones sobre el diseño e implementación de políticas públicas en seguridad y convivencia (parte VI).

I. MEDELLÍN Y SUS TRANSFORMACIONES⁴

Al hacer un recorrido por el barrio Santa Cruz, el escritor Juan José Hoyos comparte con sus lectores el asombro por los cambios que se han producido en este barrio: “donde había cañadas ahora hay puentes. Donde antes había casas de tapia con solares ahora

4 Medellín tiene un área total de 380,64 km² de los cuales 110,22 son suelo urbano y 270,42 son suelo rural. Administrativamente está dividida en 16 comunas y 5 corregimientos. Tiene a diciembre de 2011, un total de 2'368.282 personas, 1'114.923 hombres y 1'253.359 mujeres. Esto es el 74 % de la población del Área Metropolitana, el 42 % de la población de Antioquia y el 5.8 % de la población de Colombia (Alcaldía de Medellín, 2011)

hay casas de adobe de tres pisos, la calle estrecha que unía al parque con la iglesia de la Asunción es una avenida pavimentada llena de buses, tiendas, depósitos de construcción, heladerías, mercados” (Hoyos, 2013). Algo similar se podría decir de otros barrios, solo que no sería posible poner de relieve una mejora significativa en una violencia que sigue presente en la calle y en lugares que han sido construidos o remodelados para facilitar el acceso al deporte, el conocimiento y la recreación, pero en los cuales hacen presencia grupos armados ilegales como bandas y “combos”.

El mejoramiento en las condiciones de vida de los habitantes del barrio Santa Cruz no es un hecho aislado, se enmarca en un proceso de mediana duración que tiene un punto de inicio en la implementación de políticas sociales cuyos antecedentes se remontan a la creación de la Alta Consejería Presidencial para Medellín por iniciativa del gobierno del presidente César Gaviria (1990-1994). Al respecto, Jorge Orlando Melo, quien se desempeñó como Alto Consejero para la ciudad entre los años 1993 y 1994, pone de presente la manera como se logró cimentar una transformación de la misma con el diseño de estrategias de búsqueda de la convivencia, teniendo como eje las oportunidades educativas mediante la construcción de nuevos colegios, el mejoramiento de las dotaciones básicas, promoción del empleo juvenil, mejora del espacio urbano, lucha contra estereotipos discriminatorios relacionados con el hecho de ser joven y de ser habitante de las comunas⁵. (Melo, 1994:5).

La labor desarrollada por los alcaldes Sergio Fajardo (2004-2007) y Alonso Salazar (2008-2011) hizo posible una continuidad con este enfoque y un fortalecimiento del estado en lo local mediante la lucha contra la corrupción y mejoras en la capacidad de gestión y planeación.

5 De acuerdo con la división administrativa de la ciudad esta se encuentra conformada por seis zonas (agrupan a varias comunas) y 16 comunas (agrupan a varios barrios). Sin embargo en la década de 1980 con el auge del narcotráfico la noción de *comuna* se asocia con lugares que se distinguen por la ocurrencia de hechos violentos y el accionar de bandas promovidas primero por Escobar en la década de 1980 y luego por paramilitares y organizaciones delincuenciales en las décadas de 1990 y 2000.

Con una propuesta electoral moderna, de transparencia, de inversión social en especial en educación y de lucha contra la corrupción, se dio el triunfo de Sergio Fajardo, primer candidato respaldado por Compromiso Ciudadano, una fuerza independiente de los partidos tradicionales Liberal y Conservador. Además de una fuerte apuesta en lo social, que se concretó en la inversión y los proyectos del Plan de Desarrollo de Medellín (2004-2007) “Medellín compromiso de toda la ciudadanía”, se apostó por mejorar los índices de cobertura en educación (“Medellín la más educada”, programa bandera), salud, así como por el desarrollo de un modelo de urbanismo social, una propuesta de inversión pública en obras de infraestructura física de bienestar colectivo (bibliotecas, colegios de calidad, parques lineales). También se dio impulso a proyectos urbanos integrales (PUI) en las zonas más pobres y violentas, con el propósito de que las obras físicas fueran de la mano con cambios sociales y culturales en las comunidades y se trabajó en la implementación del presupuesto participativo como espacio mediante el cual las organizaciones barriales pudieran tomar decisiones sobre la inversión a realizar en sus comunidades y contribuir a una ruptura con prácticas clientelistas⁶ .

En la administración de Alonso Salazar (2008-2012), quien se desempeñó como Secretario de Gobierno de Fajardo, hay nuevos logros en el mejoramiento de los índices de calidad de vida, la reducción de la pobreza y la desigualdad. Entre los años 2008 – 2012 (período de Salazar y primer año de administración de Aníbal Gaviria), según el informe de Medellín como Vamos (2012), el coeficiente de Gini⁷ se redujo en un 7,8 %, al pasar de 0,542 a 0,5. También se produjo una disminución de la brecha entre las comunas

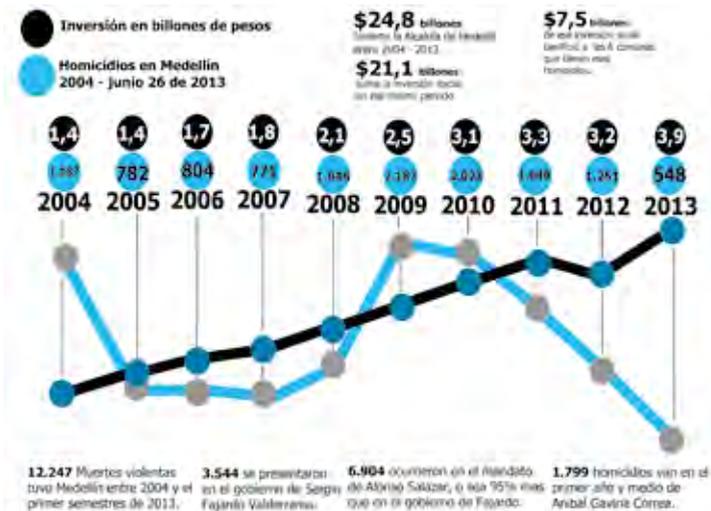
6 Lo que se observa una década después es una pervivencia de este tipo de prácticas clientelistas y su aprovechamiento en algunos sectores por parte de las redes criminales como fuente de recursos y para la ampliación de su influencia social y política.

7 El coeficiente de Gini es una medida de la desigualdad que normalmente se utiliza para medir la desigualdad en los ingresos, pero puede utilizarse para medir cualquier forma de distribución desigual. Es un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos) y donde el valor 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno).

de mayor calidad de vida (El Poblado, Laureles y La América) con respecto a las que presentan los más bajos índices (Popular, Villa Hermosa, Manrique, Santa Cruz y San Javier). Del mismo modo prosiguió la tendencia de reducción de pobreza y pobreza extrema, ubicándose en 17,7 % y 3,5 %, respectivamente. Sin embargo y de acuerdo con los resultados del informe de la ONU sobre inequidad urbana en América Latina (2013), Medellín ocupa el primer lugar, seguido por la ciudad de Cali, entre las ciudades colombianas.

Aunque los montos de la inversión social se han incrementado años tras año, especialmente en las comunas más vulnerables, esto no ha tenido los resultados esperados en la disminución de los homicidios. El siguiente gráfico ilustra el comportamiento prevalente entre los años 2004 y 2013.

Gráfico No. 1
Inversión social y homicidios en Medellín (2004-junio de 2013)



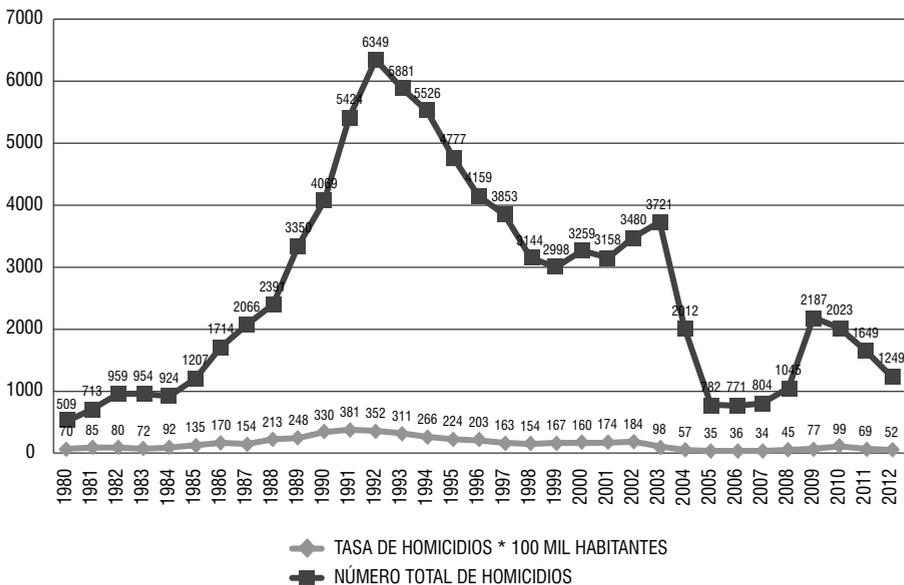
Fuente: Periódico El Colombiano (2013).

Pero ya desde el año 1994, el Alto Consejero Jorge Orlando Melo, al hacer un balance de su gestión, había advertido sobre la inconveniencia de generar expectativas de corto plazo en la superación de los problemas de violencia que aquejaban a la ciudad ante el predominio

de una “lógica inercial de la violencia”, producida por las bandas al convertirse en promotoras de un “modelo de vida, que permitía en pocos meses pasar de la pobreza a la opulencia y a la posesión de vehículos, apartamentos y otros signos de reconocimiento social y emocional”. Al igual que la manera como la sociedad había sido permeada por la violencia, lo que se podía apreciar en “niveles de agresión que producían a su vez en otros sectores la necesidad de armarse, para protegerse o para anticipar el crecimiento del poder del otro”, y en el hecho de que si bien la mayoría de los habitantes de los barrios populares querían la paz, se sentían “impotentes y amedrentados frente a los delincuentes profesionales y no se atrevían a colaborar con procesos que pudieran ponerlos en riesgo” (Melo, 1994:7).

Aunque este diagnóstico no ha perdido actualidad, es de resaltar un logro importante en la disminución de los homicidios, aunque con ciclos de altísima violencia como puede apreciarse en este gráfico:

Gráfico No. 2
Comportamiento de los homicidios según tasa y número total de homicidios 1980-2012



Fuente: Elaboración propia con base en información suministrada por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín – SISC. Alcaldía de Medellín

Hay que recordar que en 1991 se produce la entrega de Pablo Escobar y su reclusión en la cárcel denominada La Catedral. Desde este lugar estratégico seguía impartiendo órdenes para atentar contra personas que consideraba enemigas o traidoras. Además, la ausencia de jefes de bandas encargados de la protección de su jefe generó un vacío de autoridad que fue aprovechado por las denominadas bandas de *chichipatos*, dedicadas a delinquir en sus propios barrios y también por quienes aprovecharon el momento para proceder a los ajustes de cuentas a nombre de Escobar (Martin, 2013:209)

En el año 2002, el detonante de la violencia fue la confrontación entre las milicias de las FARC y del ELN, el Bloque Cacique Nutibara y el Ejército en la comuna 13 que alcanzó su máxima expresión en la realización de la llamada Operación Orión, mediante la cual se logró una derrota estratégica de la guerrilla en la ciudad, pero también la consolidación del Bloque Cacique Nutibara perteneciente a las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia) como un poder indiscutido en la ciudad. Esta disputa condujo a que en ese año Medellín aportara el 81 % de los homicidios, el 93 % de las masacres y el 70 % de los secuestros del departamento de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2002. Citado en Giraldo, 2008).

Hacia el año 2009, la ciudad se convierte en un escenario en disputa que tiene como protagonistas a Alias Valenciano y Alias Sebastián, quienes encabezan las dos facciones en las que se dividió la llamada Oficina de Envigado⁸, a raíz de la extradición de alias Don Berna el 13 de mayo del 2008. Los enfrentamientos entre los combos al servicio de uno u otro sector se suceden en varias zonas de la ciudad, teniendo como principal epicentro algunos territorios pertenecientes a la comuna 13 y a la comuna 8.

8 La Oficina de Envigado es el nombre que identifica a la compleja estructura criminal que tuvo sus inicios en la década de 1980 con Escobar y que funciona como oficina de cobro, agencia de protección de narcos y de coordinación de múltiples actividades criminales a cargo de bandas y combos. Ver al respecto Restrepo y Franco (2012). .

Aún haciendo abstracción de lo que acontece en estos años críticos, las cifras de homicidio siguen siendo elevadas lo que pone de presente un enraizamiento social de la violencia que no sólo es atribuible a actores colectivos de la violencia, sino también a personas que contratan los servicios de sicarios o se toman la atribución de ejercer justicia por su propia mano para dar solución a conflictos cotidianos que se generan en la vecindad o al interior de los hogares y a los que espera dar solución de forma expedita, sin tener que recurrir a una justicia de la cual se desconfía o se considera de difícil acceso.

Sin embargo en Medellín el homicidio como un hecho relevante es reciente. Hasta mediados del siglo XX, era visto como un asunto individual y asociado a problemas pasionales o venganzas. Los más frecuentes eran la riñas en las cantinas de Guayaquil y en algunos barrios. Sin embargo, lo que más preocupaba a las autoridades locales eran los delitos contra la propiedad: robos a residencias, atracos a bancos y joyerías, cometidos por bandas delincuenciales. El narcotráfico transformó el panorama de la criminalidad tanto en lo relacionado con la elevación de la tasa de homicidios muy por encima de la de lesiones personales, como respecto a los responsables y a la representación social del homicidio, al estar asociado al cálculo de organizaciones criminales para ajustar cuentas y eliminar a todo aquel considerado amenaza para sus planes de dominio.

Otro cambio no menos significativo se produjo en la geografía de la violencia en la ciudad. Hasta la década del 70 los focos de la violencia coincidían con las zonas de prostitución y con el sector de Guayaquil localizado en el centro histórico de la ciudad donde se concentraban el comercio y numerosas cantinas, inquilinatos y prostíbulos. Como es sabido, el reclutamiento de jóvenes en varias comunas de la ciudad por Pablo Escobar para hacer parte de su ejército tuvo un impacto notable en el aumento de los homicidios, en la proliferación de bandas y en la estigmatización de las comunas localizadas en las zonas nororiental y nororiental (Populares, Manrique, Aranjuez, Castilla) como los nuevos epicentros de la violencia. En la última década, el centro de atención se desplaza

hacia las comunas 8 y la comuna 13, ante la conversión de algunos sectores en un escenario en disputa entre milicias de la guerrilla, paramilitares y ejército, y en la actualidad ante las disputas entre nuevas agrupaciones alinderadas, unas con la Oficina de Envigado y otras con Los Urabeños⁹.

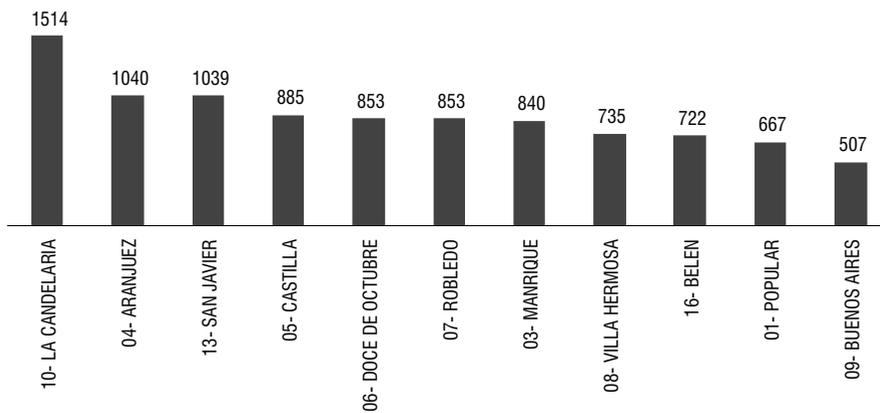
Ahora bien, si se observan los lugares donde se concentran los homicidios se encuentra que el centro histórico-comuna 10, Candelaria-, se mantiene como el lugar más crítico debido a las altas cifras de lesiones personales, homicidios y ciertas formas de delincuencia (robos y atracos). Aunque esta zona no es, como antes, un referente común para los habitantes de la ciudad, cumple una función estratégica como recurso de sobrevivencia de sectores populares por la posibilidad de vinculación a una economía informal en expansión desde la década del 70. También el centro se ha convertido en zona de operaciones de organizaciones delincuenciales y de mafias atraídas por el funcionamiento de negocios tales como casinos, discotecas, y centros comerciales, todo lo cual facilita el lavado de activos, el comercio sexual y la trata de personas. El centro es considerado en la actualidad como una prioridad en materia de seguridad y de lucha contra el poder económico de redes criminales por parte de autoridades civiles y de policía Sin embargo, no se logran resultados significativos pese a los operativos realizados, donde los más afectados son los vendedores ambulantes y comerciante informales.

El siguiente gráfico, correspondiente al acumulado de homicidios en la última década, muestra ciertos cambios y permanencias en ciertos lugares. Por ejemplo, la destacada figuración de las comunas de Aranjuez, Castilla y 12 de Octubre indica una relación de continuidad que se remonta a la época de auge del narcotráfico.

⁹ Esta organización armada es producto del poder armado que construyó el Bloque Elmer Cárdenas y el Bloque Bananero en el Urabá y el Norte del Chocó, pero recoge a su vez a cientos de combatientes de las ACCU en Córdoba y de las estructuras armadas del Bloque Mineros y el Bloque Central Bolívar en el Bajo Cauca y el Nordeste antioqueño, que tras la desmovilización, no encontraron alternativas en la vida civil o simplemente nunca participaron de la desmovilización (Verdad Abierta, 2011).

De igual forma se advierte un deterioro en la situación de otras comunas en las que el número de homicidios no era tan elevado (Villa Hermosa, San Javier y Belén), lo cual refleja los impactos causados por la disputas entre facciones del narcotráfico y por la urbanización de la guerra.

Gráfico No. 3
Acumulado del número de homicidios por comunas. Medellín (2003-2011)

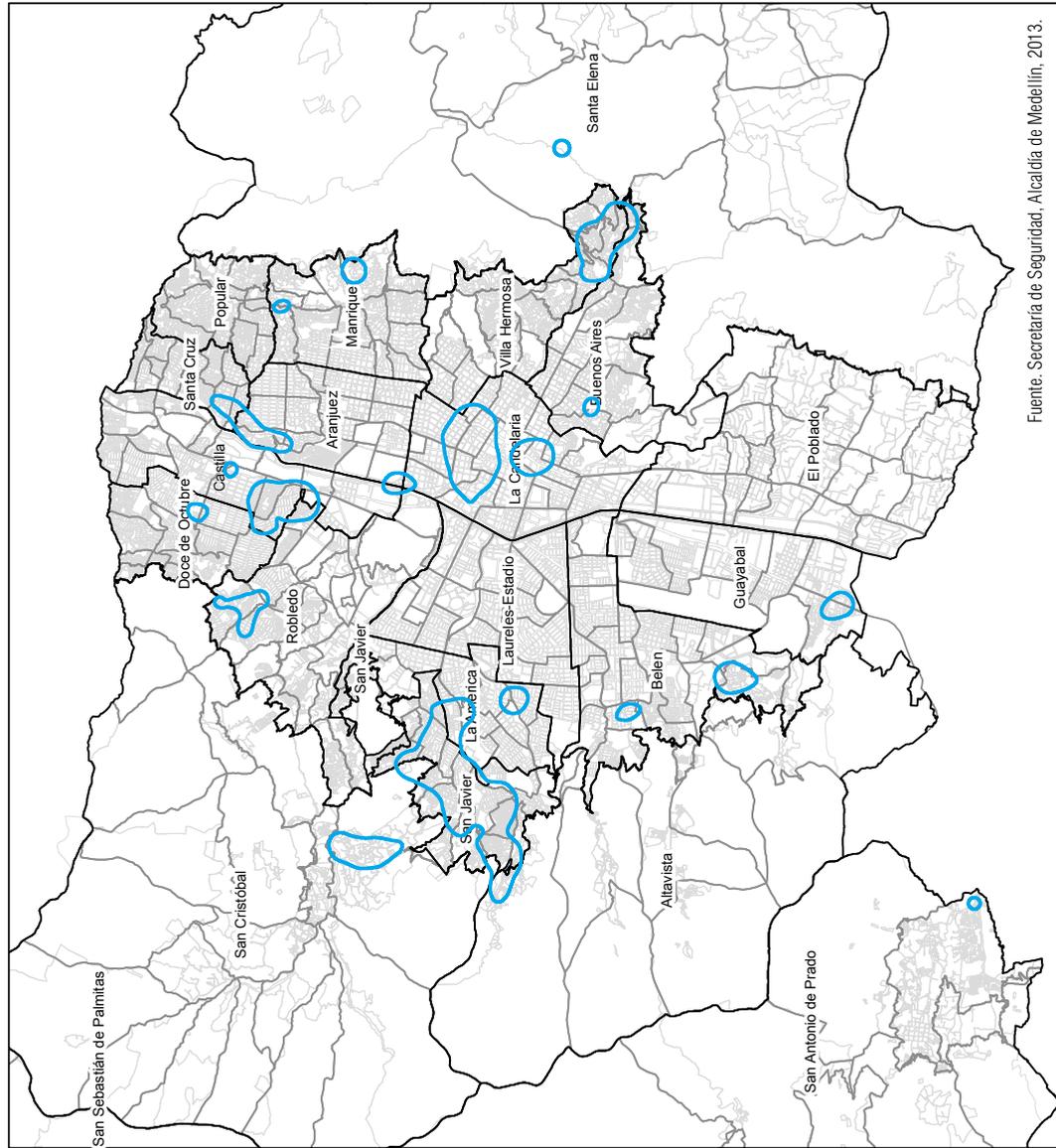


Fuente: Elaboración propia según información suministrada por el Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de Medellín – SISC. Alcaldía de Medellín, 2012

Es del caso advertir que al interior de las comunas (que agrupan varios barrios) opera una lógica similar. Los homicidios se concentran en ciertos sectores en los cuales estas conductas son más recurrentes y no en todos los casos corresponden a lugares de la periferia. También se presentan en barrios tradicionales donde hay una actividad comercial acompañada de una alta densidad poblacional (por ejemplo, Castilla), o en ciertas zonas del centro histórico que se han convertido en área de operaciones de redes delincuenciales.

El siguiente mapa, aunque abarca un período corto (primer semestre de 2013), coincide con la tendencia observada en la década de 2000.

Mapa No 1. Lugares de concentración de los homicidios.



Fuente. Secretaría de Seguridad, Alcaldía de Medellín, 2013.



Alcaldía de Medellín
SECRETARÍA DE SEGURIDAD
2014



HOMICIDIOS
ene 01 - abr 30 de 2013

— Homicidios

1:90.000



II. ACTORES Y ESTRUCTURAS DELINCUENCIALES: EN PERMANENTE MUTACIÓN

El poder de las mafias en Medellín se sustenta en los aprendizajes adquiridos desde la década de 1980 por un diverso tipo de agrupaciones (bandas, combos, milicias) en el campo de la criminalidad y del conflicto armado, dados los nexos entre la Oficina de Envigado y las Autodefensas (Bloque Cacique Nutibara) y la manera como ello favorece la transmisión de aprendizajes en formas de ejercicio de la violencia y el establecimiento de vínculos con redes criminales transnacionales.

Para una comprensión de este proceso es necesario tener en cuenta algunos antecedentes, las trayectorias de los actores más representativos y las transformaciones en las dinámicas de la violencia.

La existencia de bandas en la ciudad se remonta a la década del 50, momento a partir del cual se hizo notar la habilidad de bandas de delincuencia común para llevar a cabo atracos a joyerías y bancos, robos a residencias y, en los comienzos del Frente Nacional (1958), de algunos secuestros. En todo caso, su número era reducido así como su radio de acción y los recursos de los cuales disponían (Jaramillo, 2001). También fueron los inicios del fenómeno de las pandillas en los barrios:

Las peleas se libraban a puño limpio, a veces por defender a un amigo, aunque pronto se zanjaban las diferencias. Otras, a punta de piedra que dejaban uno que otro herido; en ocasiones la Policía retenía momentáneamente a algunos jóvenes o a sus padres, pero sin consecuencias. Las pandillas no se ocupaban de acciones delictivas, así que cuando alguien pasaba la línea y “se le iba la mano”, quedaba excluido de los programas recreativos o deportivos, y de la compañía de sus pares. (Entrevista a líder social de la comuna 8, Medellín, 2012)

Con el narcotráfico se dio una radical transformación en el perfil y en el *modus operandi* de las pandillas, buena parte de las

cuales se articulan al narcotráfico (Salazar y Jaramillo, 1992). Ya para los años comprendidos entre 1985 y 1990 operaban unas 153 bandas en el Valle de Aburrá, 122 en Medellín (87 de ellas en la zona nororiental), 8 en Envigado, 19 en Bello y 11 en La Estrella. (Salazar y Jaramillo, 1992). Su poder se hace visible con el auge del sicariato y con la realización de atentados, masacres, y acciones terroristas de gran impacto en el período de la guerra contra el Estado por parte de Escobar (1988-1993). La experiencia adquirida por quienes estuvieron a su servicio no tiene paragón con otras agrupaciones similares en las demás ciudades colombianas.

En la actualidad se entiende por banda una agrupación con trayectoria y reconocimiento en el mundo delincriminal, con un amplio radio de acción, articulación a redes dedicadas ya sea al tráfico de drogas, la extorsión, el microtráfico u otro tipo de actividades (hurto de motos y vehículos). Son las encargadas de la subcontratación de combos. Varios entrevistados coinciden en la apreciación de que es la “delincuencia seria”, la cual se cuida de incurrir en excesos propios de los principiantes que integran los combos.

En el marco de la estrategia de lucha contra objetivos de alto valor, la Policía ha priorizado la lucha contra las denominadas Odin (Organizaciones Delincuenciales Integradas al Narcotráfico) y que corresponden a aquellas bandas cuya principal actividad es el narcotráfico, aunque pueden estar vinculadas a otras actividades y mantienen un control territorial en sus zonas de ubicación. Para el caso de Medellín se han catalogado como Odin a las bandas de La Terraza, San Pablo, Los Triana, El Picacho, Robledo, Caicedo, Belén Rincón, Altavista y San Javier (El Colombiano, 2012).

El predominio de este tipo de bandas no conlleva una desaparición de las bandas de la delincuencia común especializada en actividades delictivas como el *fleteo*¹⁰, atraco, hurto de vehículos,

10 Atracos a personas que han retirado dinero en efectivo de los bancos.

estafas, robo de celulares o de establecimientos comerciales donde operan los *escaperos*¹¹. El centro histórico de la ciudad ofrece ventajas que facilitan su actuación, aunque su posibilidad de operación autónoma encuentra un límite en el control que ejercen las denominadas Convivir¹², a las que se les debe cancelar la cuota o *vacuna* que les asignen. También deben actuar con arreglo a ciertas pautas como no delinquir en ciertas zonas ni cometer homicidios que llamen la atención de las autoridades.

Los *combos* presentan similitud con la pandilla juvenil, en tanto espacio de socialización y construcción de identidades, pero se diferencia en su articulación a estructuras criminales complejas (Oficina de Envigado). La edad de sus integrantes es variable, pero se calcula que puede oscilar entre los 10 y los 25 años. En la mayoría de los casos, viven en el barrio. Son los encargados de mantener el control del territorio. Su nivel de profesionalización es menor que el de los integrantes de una banda. Son frecuentes los reacomodos ya sea por las alianzas establecidas con otros grupos, la movilidad de sus integrantes o la acción policial. El *combo* se diferencia del *parche* el cual se asocia con lugares de reunión de jóvenes para escuchar música, ver un partido de fútbol o consumir droga.

Los *combos* pueden establecer tratos con las bandas para el cobro de extorsión, microtráfico o tareas de vigilancia y protección. Los habitantes de las zonas donde actúan sienten hacia ellos un gran temor por su arbitrariedad y sus excesos, pues no hacen más que “dar bala a lo loco”, lo que les ha valido el calificativo de “asados”.

11 Se refiere a personas que roban en almacenes y salen huyendo con el botín.

12 Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada creadas en Colombia mediante Decreto 356 de 1994, como mecanismo de autoprotección de hacendados en contra de las guerrillas pero que debido a su creciente articulación con los grupos paramilitares fueron declaradas ilegales a finales de la misma década. Sin embargo ello no implicó su desaparición como ocurrió en el departamento de Antioquia y en Medellín (Ver al respecto el apartado sobre extorsión del presente artículo).

Aunque la presencia de bandas y *combos* en los barrios es un fenómeno generalizado, es importante hacer notar diferencias en su concentración y permanencia, lo cual incide en la configuración de áreas en disputa, y los métodos mediante los cuales se pretende ejercer control sobre sus habitantes. No es lo mismo habitar una zona bajo el dominio de bandas históricas que ejercen el control de un área extensa que en un barrio donde los combos se enfrentan a bala para ejercer un control cuadra a cuadra.

Las comunas 1 y 3 en la zona nororiental y las comunas 5 y 6 en la zona noroccidental son las que presentan la mayor concentración de bandas y *combos*. Se aprecia el peso de una tradición que se forjó desde mediados de la década del 80, con la conformación de bandas que adquirieron notoriedad por su relación con el narcotráfico. Ya para los años 1985 y 1990, la Policía daba cuenta de la existencia de 87 bandas en la zona nororiental y 16 en la zona noroccidental. La mayoría de ellas estaban asentadas en Aranjuez, un barrio tradicional y catalogado como de estrato medio bajo (Salazar y Jaramillo, 1992: 88-90). Rápidamente se generó una dinámica expansiva que facilitó la consolidación de algunas bandas (ahora denominadas Odin). En los últimos años empiezan a figurar bandas que a su vez subcontratan combos y cobran *vacunas*.

El contraste se presenta en la comunas 8 y la comuna 13 (San Javier). Es de notar como en la comuna 13, no se registran antecedentes en la constitución de bandas ligadas al narcotráfico como en otras de la ciudad. Las Milicias América Libre y Milicias Populares de Occidente ejercieron un control en la década de 1990 y hasta el momento de inicio de la ofensiva paramilitar en 2001, protagonizada por el Bloque Metro, y luego por el Bloque Cacique Nutibara (Grupo de Memoria Histórica, 2011: 59). Posterior a la realización de la Operación Orión (2002) hasta el presente la tendencia es hacia una proliferación de *combos* que han adquirido notoriedad por su responsabilidad en el asesinato de

integrantes de grupos de hip hop de la comuna, reconocidos por su labor artística, así como por los enfrentamientos y los controles territoriales que ejercen. El siguiente gráfico es ilustrativo de esta significativa transformación.

En la comuna 8, lo característico ha sido la disputa entre una banda histórica, la de Caicedo con un amplio radio de acción y las milicias del ELN con asiento en la parte alta de la comuna (sector de La Sierra), hasta la incursión del Bloque Metro y el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas a finales de la década de los 90. Una vez superado este momento, se reactiva la disputa entre la banda histórica de Caicedo aliada con la Oficina de Envigado con La Sierra en acuerdo con Los Urabeños.

De este abigarrado panorama de actores armados ilegales hacen parte las Milicias, fenómeno en auge desde mediados de los años 80 hasta el momento de su desmovilización en 1994 y las Autodefensas, que en Medellín no fueron el resultado del arribo a la ciudad de frentes que operaban en áreas rurales, sino de la conversión de la Oficina de Envigado en el Bloque Cacique Nutibara.

Las Milicias: surgen hacia mediados de la década del 80 como respuesta a la demanda de seguridad de los habitantes de barrios afectados por los llamados *chichipatos* (atracadores, violadores, drogadicotos). Entre los fundadores de las Milicias se cuentan jóvenes que recibieron instrucción político-militar del M19¹³ y de barrios influenciados por personas desvinculadas de organizaciones insurgentes, en especial del ELN, que se dedicaban a la promoción de organizaciones barriales cuya labor se vio afectada por el accionar de bandas y *combos*.

13 El M19 hizo presencia en algunos barrios con el propósito de promover “campamentos de paz,” en el marco de negociaciones iniciadas con el gobierno de Belisario Betancur (1982-1986). Sin embargo, en Medellín esto favoreció a algunos grupos de delincuencia común que recibieron instrucción militar en estos campamentos (Salazar y Jaramillo, 1992).

Gráfico No. 4 Presencia de bandas y combos. Comuna 13. 2001-2011

2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Los Cuquitas	Comandos Armados del Pueblo – CAP	ELN (Carlos Alirio Buitrago)	Desmovilizados Bloque Cacique Nutibara	Los Cuquitas	Los Cuquitas	Los Cuquitas
Comandos Armados del Pueblo – CAP	Bloque Metro	Bloque Metro	Jose Luis Zuluaga (Autodefensas Magdalena Medio)	Desmovilizados Bloque Cacique Nutibara	Los Chinos	El Salado
Los colchotoneros	Bloque Cacique Nutibara	FARC			Desmovilizados autodefensas	La Torre
ELN (Carlos Alirio Buitrago)					Los Victorinos	Combo de Goyo
Los Paras					El Combo	Combo del Gordo
Los Cobres						Roman
Los Zaros						Renacer (desmovilizados de las FARC)
El socorro						El Gordo
Autodefensa de Córdoba y Urabá						Combo de Roque
						Los Lecheros

Elaboró: Corporación Región
Fuentes: El Mundo, El Colombiano, El Espectador, El Tiempo, Agencia de Prensa del Instituto Popular de Capacitación.

Gráfico No. 4 Presencia de bandas y combos. Comuna 13. 2001-2011

2008	2009	2010	2011	2012	2013
Los Cuquitas	Las Cuquitas	Las Cuquitas	Los Cuquitas	Los Urabeños	El Coco
El Salado	La Torre	Los Urabeños	Los Colchoneros	El Salado	
La Torre	El Pesebre	El Salado	Los Urabeños	ODIN La Quiebra	
Combo de Goyo	Las Peñitas	La Torre	La Torre	El Pesebre	
El Pesebre	La 115	Combo de Goyo	Combo de Goyo	Las Peñitas	
Roman	La 39	ODIN Pradera	ODIN Pradera	La 115	
El Reversadero	La Arenera	ODIN San Javier	ODIN San Javier	Los Conejos	
Las Peñitas	Cuatro Esquinas	ODIN La Quiebra	ODIN La Quiebra	El Coco	
La Arenera	La Pedro J	El Pesebre	El Pesebre	La Agonía	
Cuatro Esquinas		El reversadero	El reversadero	La seis	
La Sexta		Los Conejos	Las Peñitas	Los Picuas	
La Agonía		La Arenera	Los Conejos	La Divisa	
20 de Julio		Cuatro Esquinas	La 39		
El Depósito		La sexta	El Coco		
El Hoyo		La Agonía	La Sexta		
El Volao		20 de julio	La Agonía		
Los Pinguinos		El Depósito	20 de Julio		
El Alto		El Hoyo	El socorro		
La Chinga		Los Pinguinos	Los Triana		
Quicorroña		El Alto	La América		
Las Escaleras		La Chinga	Los Pecueca		
Combos de las Independencias 1, 2 y 3		La Quicorroña	El Corazón		
		Las Escaleras	El Dos		
		Combos de las Independencias 1, 2 y 3	La Gabriela		
		La Luz del Mundo	El combo de cristobal		
		La Urba	La Oficina		
		La Placha	Los Picuas		
		El Kilo	La Loma		
		Los Pirusos	Eduardo Santos		
		La Divisa	Bellavista		
			Guadarrama		
			Barrio Nuevo		
			El Plan del Che		
			La banda del viejo		
			Travesías		
			Los Paracos		
			Los del uno		
			La Divisa		
			La Asomadera		

Las Milicias del Pueblo y para el Pueblo, el grupo fundador, no aceptó ser considerado expresión urbana de la guerrilla. Reivindicaron su condición de autodefensa, cuya misión consistía en “restablecer el orden” mediante la limpieza de elementos considerados indeseables (violadores, atracadores, viciosos). Aunque en principio tuvieron un radio de acción limitado (barrios de la zona nororiental), se expandieron rápidamente. El auge miliciano se empieza a desvanecer cuando el núcleo fundador comienza a desmovilizarse. En 1994 se llevó a cabo una negociación en la que participaron las Milicias del Pueblo y para el Pueblo y las Milicias del Valle de Aburrá (con influencia del ELN)¹⁴. La desmovilización no implicó la desaparición de todas las Milicias ya que de esta negociación no hicieron parte otras agrupaciones con presencia en las comunas 8 y 13, las cuales después se convertirán en el blanco de la ofensiva paramilitar al ser consideradas una avanzada de la guerrilla en la ciudad.

Los paramilitares: Sus antecedentes se remontan a la constitución del grupo MAS (Muerte a Secuestradores) que surgió como reacción de los narcotraficantes al secuestro (el 12 de noviembre de 1981) de Martha Nieves Ochoa Vásquez, hermana de Jorge Luis, Juan David y Fabio, miembros del Cartel de Medellín, por parte de una célula del M-19 que pedía 12 millones de dólares por su rescate. Para dar con su paradero se desató una implacable persecución contra militantes y supuestos colaboradores del M-19 en la ciudad (Salazar y Jaramillo, 1992).

14 La cifra de desmovilizados ascendió a 843, lo que significaba la reincorporación a la legalidad del 85% de las fuerzas milicianas. Este hecho a la luz del presente, como observan Giraldo y Mesa (2013), reviste una particular importancia si se tiene en cuenta que su magnitud fue igual a la del Bloque Cacique Nutibara (BCN): “El número de armas entregadas superó las de la Corriente de Renovación Socialista (CRS), la relación arma/hombre superó la del Ejército Popular de Liberación (EPL)”. En 1998 se desmovilizó otro grupo miliciano denominado Movimiento de Integración Revolucionaria – Comandos Armados MIR-COAR, que tenía su centro de influencia en la zona occidental de la ciudad. En su estructura e ideología era muy similar a los grupos de Milicias que se desmovilizaron en 1994.

La ofensiva paramilitar adquiere una nueva dimensión hacia 1996 con las Autodefensas del Magdalena Medio que desplazan integrantes del frente José Luis Zuluaga hacia la ciudad, pero no logran desterrar a las milicias. Esta tarea le fue encomendada en 1998 a Alias Doble Cero, miembro de la cúpula de las AUC (Autodefensas Unidas de Colombia), ex integrante del Ejército. Éste se oponía a una injerencia del narcotráfico en las Autodefensas al considerar que podía desvirtuar su legitimidad como abanderadas de la lucha antsubversiva. Para llevar a cabo la misión encomendada, desplaza efectivos del frente que operaba en el Nordeste Antioqueño, establece alianzas con algunas bandas y lanza una ofensiva contra las Milicias del ELN en el sector de La Sierra. Sin embargo, fracasa en este intento. Le sucede alias Don Berna, también integrante de la dirección de las AUC, quien crea el Bloque Cacique Nutibara, agrupación protagónica hasta su desmovilización en 2003.

1. Reacomodos Sucesivos:

La pervivencia de estos actores no es comprensible sino se tiene en cuenta la importancia que adquieren las ciudades en el marco del conflicto armado interno, la reorganización de las estructuras del narcotráfico y el liderazgo ejercido por ciertas figuras. Es factible diferenciar varios momentos: la reorganización después de la muerte de Escobar (2 de diciembre de 1993), la ofensiva paramilitar, el dominio del Bloque Cacique Nutibara y, por último, la fragmentación de la Oficina de Envigado y su impacto en las disputas por la supremacía criminal.

La reorganización después de Escobar: Algunas bandas que venían actuando en Medellín desde la década del 80 y que estuvieron al servicio de Escobar, como La Terraza, se articulan a la Oficina de Envigado, conformada por antiguos integrantes de Los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar). Ésta sirvió como espacio de encuentro entre Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas Campesi-

nas de Córdoba y Urabá, e integrantes de organismos de seguridad del Estado.

Diego Fernando Murillo, alias Don Berna, se convirtió en el gestor de un modelo organizativo en el cual se mantienen unas jerarquías (jefes de combos- bandas- integrantes de la cúpula), pero con funcionamiento en red. Esta estrategia facilita su accionar y logra neutralizar la persecución policial, de tal manera que la detención de algún jefe no provoque mayores traumatismos. Al decir del Tuso Sierra, ex integrante de la cúpula de la Oficina de Envigado, la clave del éxito de esta organización se debió a su forma de operar como “una especie de cooperativa dedicada al narco, cobro de cuentas y la extorsión” (Tribunal Superior del Distrito, Sala de Justicia y Paz, 2013: 97).

Esta adecuación de las estructuras del narcotráfico se hizo necesaria para poner orden al caos posterior a la caída de Escobar, con las acciones de bandas y *combos* que se dedicaron a delinquir en sus propios barrios, al cobro de *vacunas*, atracos y robos de residencias. Alias Don Berna, con el apoyo de la banda de La Terraza, procedió a eliminar a quienes se resistieron a sus dictámenes. No era posible operar en una determinada zona sin su consentimiento y el pago de una “franquicia” a la Oficina de Envigado.

De la Oficina de Envigado al Bloque Cacique Nutibara: El ingreso de alias Don Berna a la dirección de las AUC, organización resultante de la integración de grupos paramilitares de varias regiones del país dio lugar a nuevos reacomodos ¹⁵ .

De acuerdo con el testimonio de un desmovilizado del bloque Cacique Nutibara, alias Don Berna realizó una reunión adonde

15 Con respecto al fenómeno paramilitar, Mauricio Romero anota lo siguiente: Mientras que las élites ganaderas e inversionistas rurales los definen como organizaciones de autodefensa, los activistas de derechos humanos consideran el término paramilitar como el más adecuado, ya que sugiere los vínculos observados con algunos sectores de las Fuerzas Militares (2003: 36).

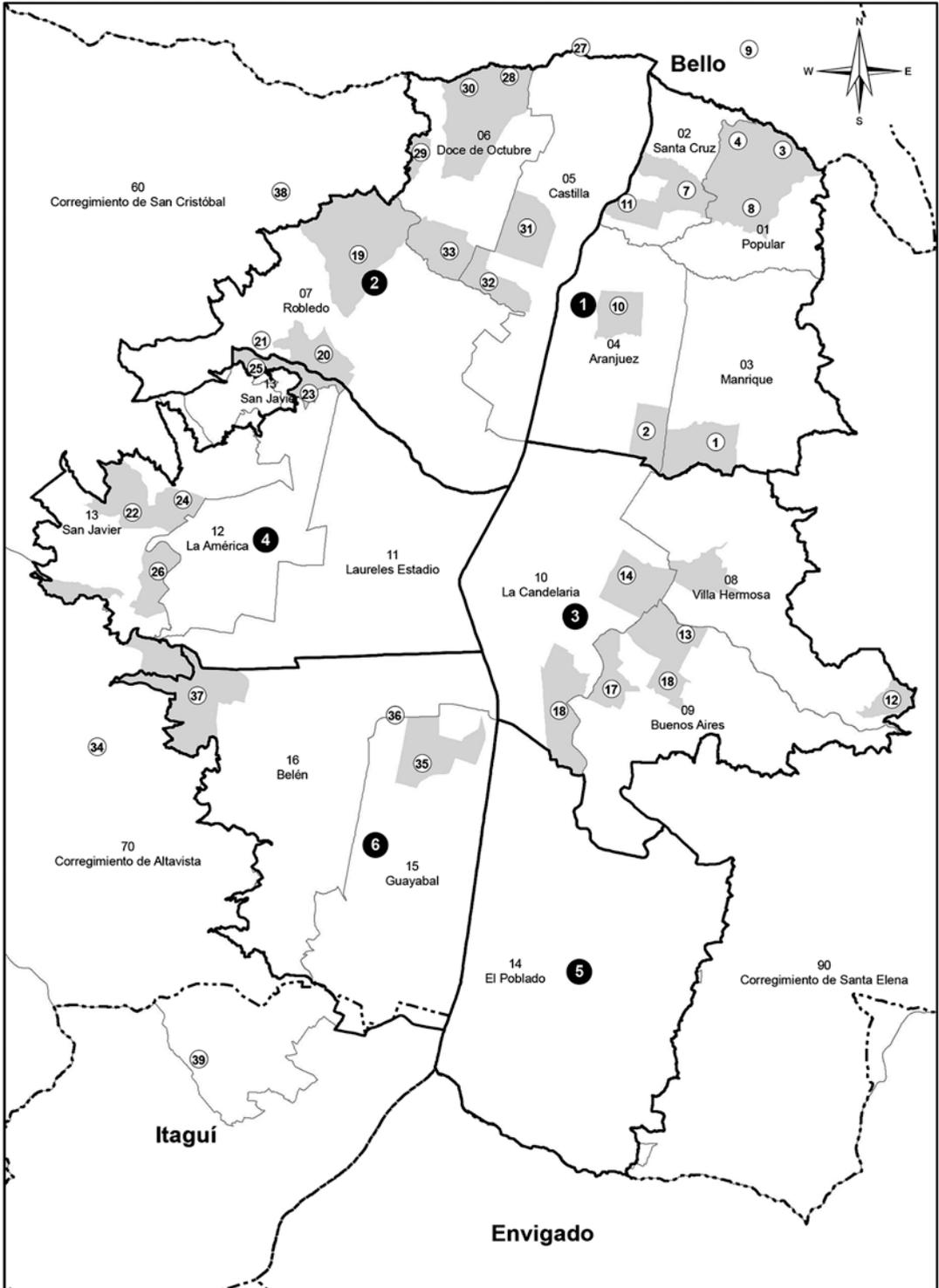
asistieron alrededor de 300 líderes o representantes de bandas y combos de Medellín, a quienes se les informó que ahora debían alinearse con el Bloque Cacique Nutibara. Pero no todos estuvieron de acuerdo. Entre los reacios a acatar esta orden estuvieron La Terraza¹⁶, la banda de Los Triana –los cuales aún hoy hacen presencia en la zona nororiental de Medellín- y la banda de Frank en la zona noroccidental, pero fueron derrotados en sus pretensiones de autonomía.

Una vez consolidado el predominio del Bloque Cacique Nutibara, alias Don Berna toma la decisión de confrontar y derrotar a las Milicias que a comienzos de 2000 tenían una presencia importante en la comuna 13.

El siguiente mapa proporciona una idea sobre el número y la localización de bandas y combos identificadas por la Policía en 2002 y a las órdenes de alias Don Berna para adelantar una ofensiva que le permitiría eliminar la competencia que representaban las Milicias de las Farc y del ELN.

16 La persecución de los jefes de La Terraza fue implacable y culminó con el asesinato de Elkin Mena, alias El Negro y de Ronald de Jesús Arroyave, alias Ronald, a cuya cabeza el mismo Castaño había puesto un precio de 700 millones de pesos. Su asesinato en Medellín se produjo después de haber aparecido en los medios de comunicación con una mini-uzi y un pasamontañas, planteando su disposición a entregarse a cambio de protección y rebaja de penas, y la promesa de entregar las pruebas que comprometían a Castaño, el máximo jefe de las Autodefensas, en varios magnicidios (El Colombiano, 2012c).

Mapa No 2. Los barrios y las bandas en Medellín, 2002.



LOS BARRIOS Y LAS BANDAS		
Los nombres de bandas con asterisco (*) corresponden a milicias, los restantes son delincuencia común		
COMUNA NOR-ORIENTAL		
1	Manrique Oriental:	La 30 u Oficina, Los Marines, La 41, Los Pildoras, Los Tobis, La Montañita
2	Manrique Trasmayo:	La Beta, La 30.
3	Santo Domingo:	La Torre*, La 29, La Silla, El Trébol*.
4	Popular:	Los Costales*, Cañada Negra.
5	Nuevo Horizonte:	Los Joyeros.
6	Villa del Socorro:	Los Champús.
7	Andalucía Francia:	La 49.
8	Granizal:	La Cancha, La 38, El Plan.
9	Santa Rita Zamora:	Los Triana.
10	Aranjuez:	Los Tubos, La Terminal, La Arboleda.
11	Santa Cruz:	El Hueco, La 103
COMUNA CENTRO-ORIENTAL		
12	Caicedo La Sierra:	Bloque Metro, El Morro, La Libertad.
13	Caicedo:	Los Mexicanos.
14	Enciso Boston:	Los Conejos, De Praga, Las Castas.
15	La Milagrosa:	Marquetalia, El Alacrán, El Nacional, Pablo Escobar.
16	Buenos Aires:	Los Cerros, El Mayey o Caunces, El Plan, Del Gordo o David.
17	El Salvador:	El Salvador.
18	San Diego:	El Buda.

COMUNA CENTRO-OCCIDENTAL		
19	Aures:	Depósito, El chispero.
20	Robledo:	Los Búcaros, La Oficina, Los Gómez, Matallana, El Hueco, La Cuchilla.
21	La Iguaná:	La Iguaná*.
22	Antonio Nariño:	Los Cuquitas.
23	El Pesebre:	Los Paras.
24	San Javier:	Los Cobras, Los Zaros, Los Colchoneros, El Socorro.
25	Vallejuelos Blaquizal:	Los Cap*.
26	Belencito Corazón:	Los Cap*.
27	París:	La Banda de Frank, Los Tintos Frios, Los Ranchos.
28	Santander:	Debeto, Los Ranchos, La 115.
29	Pichachito:	Picachito*, Los Rieles.
30	Doce de Octubre:	Los Sotos, De Guisao, Los Caretrapos, La 30 del Doce.
31	Castilla:	Los Machacos, Los Mondongueros, El Carusel, Los Lecheros, La 98 o Sancochos, La 70, Imperial.
32	Alfonso López:	Los Cola y Pola.
33	Kennedy:	La Oficina.
CORREGIMIENTO BELÉN ALTAVISTA		
34	Altavista:	Los Chivos, Autodefensas, Los Mister o Sabor Latino, Los Piñeros.
35	Barrios Antioquia:	Los Ranchos, Los Coquitos, La 24, La estefanía, La Cueva.
36	La Raya:	La Raya, El Bolo, San Rafael, Combo de Tavo.
37	Las Violetas:	Las Violetas, Los Magníficos, Las Mercedes y Belén Zafrá.
CORREGIMIENTO SAN CRISTOBAL		
38	San Cristobal:	San Cristobal, De Piru.
CORREGIMIENTO SAN ANTONIO DE PRADO		
39	San Antonio de Prado:	Limonar I y II.

CONVENCIONES

	Límite Área Metropolitana		Barrios
	Límite comunas y corregimientos		
	Zonas de Medellín		

NOMBRE DE LAS ZONAS

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1 Nor-Oriental | 4 Centro-Occidental |
| 2 Nor-Occidental | 5 Sur-Oriental |
| 3 Centro-Oriental | 6 Sur-Occidental |

Elaboración propia.
Fuente: El Colombiano, 2002

Elaboró: Juan Carlos Giraldo G.
giraldogarcia@gmail.com

A propósito de la conversión de la Oficina de Envigado en el Bloque Cacique Nutibara, alias Don Berna declaró lo siguiente:

...Medellín tiene unas complejidades muy grandes y en los barrios había combos, bandas que en algún momento estuvieron al servicio de la guerrilla. En la dinámica del conflicto, ellos también hacen parte de éste, entonces entramos a cooptar esos grupos, a que hicieran parte de nuestra organización. En esos barrios hay mucha pérdida del tejido social, mucho vicio. Necesitábamos un ente que regulara la situación. Por eso se crea la Oficina, porque no podíamos entrar con la rigidez de la Autodefensa a intervenir a esos muchachos, se necesitaba un ente más laxo, más flexible, pero que ellos estuvieran de acuerdo y coincidieran con nuestro proyecto político y social. La Oficina es la misma Autodefensa con una dinámica urbana. (El Espectador, 2013).

El Bloque Cacique Nutibara actuó de forma mancomunada con unidades de la Fuerza Pública que llevaron a cabo la Operación Orión¹⁷. En ella participaron junto con la Policía y el Ejército, la Fuerza Aérea, el DAS y la Fiscalía. Se desarrolló intensamente entre los días 16 y 18 de octubre de 2002 en los barrios 20 de Julio, las Independencias, Belencito, El Corazón y Nuevos Conquistadores. Dicha operación tuvo un gran impacto en la población por el número de tropas, el tipo de armamento utilizado (ametralladoras M 60, fusiles, helicópteros artillados y francotiradores) y las acciones contra la población civil: asesinatos, detenciones arbitrarias, ataques indiscriminados y desapariciones forzadas (Grupo de Memoria Histórica, 2011).

Desmovilización paramilitar y nuevas disputas. En cumplimiento de los compromisos adquiridos con el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2006) para proceder a la desmovilización de los frentes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) el 25 de noviembre de 2003 en Medellín, se presentaron 868 integrantes de esa agrupa-

17 La Operación Orión estuvo antecedida por 10 operaciones que se llevaron a cabo entre los meses de febrero y octubre de 2002. Ver al respecto (Grupo de Memoria Histórica, 2011: 76).

ción. Sin embargo desde el primer momento hubo dudas sobre su voluntad de abandonar las armas y de desvincularse del narcotráfico y otras actividades criminales.

Medellín es valorado como escenario propicio para poner a prueba las bondades de la desmovilización mediante la cual se esperaba garantizar la reintegración a la vida civil de los ex combatientes. Del análisis de esta experiencia que ofrece posibilidades para la expansión de actividades criminales se hará referencia en el apartado IV.

La extradición de alias Don Berna, antiguo jefe de la Oficina a Estados Unidos el 13 de mayo del 2008, junto con otros integrantes del estado mayor de las Autodefensas, y el fracaso de las negociación de paz con las AUC por parte del gobierno de Álvaro Uribe, agudizan las disputas que se venían presentando entre los mandos medios que aspiraban a ocupar el lugar de alias Don Berna.

Entre el año 2009 y 2012, se libra una guerra entre las facciones lideradas por alias Valenciano y alias Sebastián, hombres de confianza de Don Berna y con una amplia trayectoria delincuencia. Cada uno de ellos, reorganiza sus fuerzas mediante la cooptación de bandas y combos con presencia en varios sectores de la ciudad. La intensidad de los enfrentamientos de nuevo hizo temer un retorno a una situación similar a la que se vivió en la época de Escobar.

En medio de esta disputa, el 1 de febrero de 2010 se anuncia una tregua entre ambas facciones, gestionada por una denominada "comisión de notables". Esta tregua se limita al cese de los enfrentamientos entre estos bandos, pero no significó el fin de las acciones de control sobre la población ni de otras modalidades delictivas. En ella no participaron las autoridades locales. Aunque no fue claro a cambio de qué se estableció la tregua, en la ciudad se conoció que se prometieron traslados, rebajas de penas a quienes se encontraban detenidos y se entregaran a la justicia, además de la posibilidad de ingresar en los programas sociales de la Alcaldía de Medellín. (El Mundo, 2010)

Esta tregua fracasa unos pocos meses después y se reinician los enfrentamientos para luego presentarse un nuevo reacomodo de la confrontación. A partir de 2011, las disputas tienen como protagonistas a los grupos afines a las diferentes facciones aglutinadas en torno a la Oficina de Envigado contra los grupos que están con Los Urabeños. Se dice que estos han logrado tomar ventaja gracias a las alianzas establecidas con algunas bandas históricas y la cooptación de combos localizados en territorios de importancia estratégica para el tráfico de armas y droga hacia el occidente (carretera al mar) y el oriente (autopista Medellín-Bogotá).

En medio de especulaciones acerca del futuro de la Oficina de Envigado y de su competencia, Los Urabeños, se sabe de un arreglo entre esas agrupaciones¹⁸, el “pacto de fusiles”, resultado de una cumbre realizada los días 22 y 23 de julio de 2013 en un municipio cercano a Medellín. Mediante éste se estableció un cese de los enfrentamientos y una distribución de zonas de influencia, el monto de las tarifas de extorsión a las tabernas y supermercados, así como el control de las plazas de vicio. Mientras que Los Urabeños se comprometen a detener su ofensiva y a facilitar las operaciones externas de narcotráfico de la Oficina de Envigado, haciendo uso de su control sobre las zonas rurales, los miembros de la Oficina se comprometen a dejar de pelear entre ellos e imponer disciplina a las pandillas callejeras en sus territorios (El Espectador, 2013b).

Es indicativo del interés por ganar el respaldo de la población, el diseño de una estrategia de divulgación de los resultados de esta cumbre delincencial como la programación de encuentros a car-

18 Los anfitriones de esta cumbre fueron Los Urabeños, liderados por alias Don Daniel, supuesto responsable de Medellín, junto a cuatro mandos medios encargados de algunos barrios de la ciudad. De parte de la Oficina de Envigado estuvieron los representantes de las cinco facciones más poderosas del mundo criminal del Valle de Aburrá, que en conjunto representan 17 de las más poderosas oficinas de cobro y alrededor de 120 combos (El Espectador 2013b)

go de los “coordinadores de bandas” en comunas y corregimientos para “poder mostrarle a los habitantes de esos lugares que la tregua es real” y que están contribuyendo a un “clima de tranquilidad”. (Análisis Urbano, 2013).

Según lo informa el Sistema para la Información y la Convivencia –SISC-, que reúne y analiza información del Instituto Nacional de Medicina Legal, la Sijín y el CTI, al 30 de noviembre se registra una disminución del 25,2 por ciento en los homicidios. En 2012, al 30 de noviembre se registraron 1.145 homicidios, mientras que en esta fecha de 2013, la cifra es de 857 (El Colombiano, 2013b).

El “pacto de los fusiles” volvió a poner a prueba la capacidad mediadora de una comisión que, según versiones de prensa-, contó con la participación de personajes de las altas esferas que se mueven entre la legalidad e ilegalidad y tienen vínculos con La Oficina de Envigado. Estos se acercaron a representantes de las cinco facciones de La Oficina y a Los Urabeños, que estaban fortaleciendo su control en las afueras de la ciudad¹⁹.

No ha estado del todo claro qué pudo haber motivado este nuevo pacto. Quizás fue un interés en neutralizar la ofensiva policial, en ganar aceptación por su contribución a la disminución de los homicidios, o tal vez fue un intento de transformarse en una delincuencia más discreta. Lo cierto es que ha puesto de manifiesto su capacidad para incidir en los indicadores de violencia y en la percepción de seguridad.

19 Entre los integrantes de la cúpula de este grupo superior del mundo criminal están Guillermo Valencia Cossio, ex director de Fiscalías en Medellín. Fue condenado en 2011 a 15 años de prisión por colaborar con Los Urabeños. Otro fue Marlon Javier Vergara, quien llegó a ser uno de los jóvenes empresarios más prometedores y bien conectados de Medellín, hasta su arresto en 2010. Fue sentenciado a 37 años de cárcel por un asesinato que le encargó la Oficina de Envigado (El Colombiano, 2010)).

III. ECONOMÍA CRIMINAL PRÓSPERA²⁰

La diversificación de las rentas criminales derivadas no sólo de la exportación de la cocaína, sino también de la incursión en otros negocios que les garantizan altos márgenes de rentabilidad y, de contera, solventar necesidades de diversos sectores de población ha sido un factor decisivo en la construcción de un poder mafioso.

Es claro que lo anterior no puede ser considerado un rasgo peculiar de Medellín, sin embargo ésta es la ciudad donde se observa la mayor sofisticación en la construcción de una cadena criminal (Daza, 2013) y la configuración de lo que se ha denominado una amplia zona gris en la que las fronteras entre la legalidad, informalidad e ilegalidad se tornan más difusas. Sin tener que verse comprometidos con la exportación de un cargamento de cocaína, empresarios y comerciantes se lucran prestando servicios que facilitan la operación de lavado de activos, el suministro de bienes de lujo o su relación con el Estado.

La extorsión y el microtráfico, aunque no son los únicos negocios, son los que copan la atención de las autoridades y de la ciudadanía por sus montos y su impacto en la condiciones de los habitantes de la ciudad.

1. La extorsión

Es considerada uno de los delitos con la mayor expansión desde 2005. De acuerdo con los resultados de una encuesta nacional de victimización realizada en 2012, alrededor de 125.000 colombianos han pagado por una extorsión o han sido víctimas de intentos de cobro. El comandante del Gaula (Grupo Antisecuestro y Antiextorsión de la Policía) reconoció un crecimiento del 229 % en los últimos cuatro años y márgenes de rentabilidad que podrían estar

20 Se retoma la definición de Garzón (2008: 148), según la cual la economía criminal cubre actividades económicas que se desarrollan por fuera de los mercados legales, asegura los acuerdos entre los agentes del mercado ilegal, pero también puede acudir a la corrupción u otros métodos mediante la amenaza o el uso de la violencia por parte de grupos particulares.

alrededor de los 2 billones de pesos al año. Al respecto hay un bajísimo nivel de denuncia. (El Tiempo, 2013).

A la extorsión se le consideró una actividad propia de la delincuencia común hasta que la guerrilla empezó a cobrar altas sumas a compañías multinacionales, a ganaderos y comerciantes. En Medellín, Escobar apeló a la extorsión como alternativa para financiar la guerra contra el Estado, afectando con ello las finanzas de sus socios y de propietarios de *ollas*²¹, de los empresarios del chance y de la venta de gasolina de contrabando (Duncan, 2005). De otro lado, las bandas empezaron a vacunar a propietarios de tiendas, carnicerías, y almacenes, y a ofrecer “protección” a los empresarios del transporte (como lo hizo la banda de Frank en la zona noroccidental de la ciudad).

Para protegerse del pillaje de los combos, algunos empresarios del transporte procedieron a la negociación del pago de una cuota (*vacuna*) para poder garantizar su operatividad²². Pero la competencia armada entre los combos en disputa por estas rentas les generó costos excesivos al verse obligados a cancelar no una sino varias cuotas, incluso en un mismo día. Es el momento en que representantes del gremio del transporte convocan a protestas en demanda de protección por parte del Estado. En el 2010, por ejemplo, se calculaba que en promedio cada bus pagaba \$36.000 pesos (US\$18) semanales, lo que multiplicado por unos 3.200 buses representaba unos \$460 millones de pesos al mes (US\$ 23.000) (El Colombiano, 2010).

Esta situación ejemplifica los nexos entre extorsión y protección. En principio, a la víctima se le protege de los peligros derivados de las acciones de las bandas, pero luego se volverá cada vez más imperativo el pago, a riesgo de seguir siendo *vacunado*. El problema

21 Lugares en donde se expende y consume drogas. Por lo general se encuentran localizadas en sectores del centro histórico de la ciudad. Su existencia se ha hecho visible a raíz de la realización de operativos policiales.

22 Aunque en Medellín se han dado pasos importantes en la construcción de un sistema integrado de transporte con el Metro, el Metrocable y el Metroplus, se depende en gran medida del servicio de las rutas de buses y también de colectivos informales que prestan el servicio a las personas residentes en los lugares más apartados.

para las redes criminales es mantener el monopolio de la seguridad ante la incursión de otras agrupaciones en sus propios dominios.

La relación establecida con el sector del transporte ha sido aprovechada por bandas para hacerse propietarios de buses que compran bajo amenaza. También ofrecen el servicio de venta de repuestos y lavado de vehículos en terminales localizadas en territorios bajo su control. En 2008, por ejemplo, se estimó que en la comuna 8 por cada bus lavado se recibían alrededor de \$22,000 pesos (US\$11), de lo cual se descontaban entre \$1.500 y \$2.000 pesos (US\$ 1) correspondientes al pago de cada lavada del vehículo. Según la Policía, el resto del dinero quedaba a disposición de los jefes, y una parte de él se invertía en armamento. (Instituto Popular de Capacitación, 2008)

Esta situación explicaría la razón por la cual el control de estos terminales se convierte en uno de los objetivos en disputa. Al decir de uno los integrantes del combo que opera en esta comuna, el control de la terminal de Villa Liliam es un trofeo de guerra por ser un paso obligado para las rutas de buses y facilitador de la conexión entre los sectores de Tres Esquinas y La Sierra. Por esto es que se la disputan Los Urabeños y La Oficina, las cuales abastecen de armas a los combos (El Colombiano, 2013d).

La tienda de barrio es el otro blanco preferido para el cobro de vacunas. Estos establecimientos son muy importantes en la vida del barrio, sirven de soporte a la economía local y son punto de encuentro entre vecinos. Los resultados de un estudio sobre mercados indica que es el negocio preferido por los colombianos, pues constituye el 12 % de los casi 600.000 establecimientos revisados en 58 municipios mayores de 100.000 habitantes (El Tiempo, 2013).

En Medellín es generalizada la opinión de que “no hay tienda de barrio en la que no se pague *vacuna* a algún combo”. Ésta puede estar representada en una suma de dinero o su equivalente en cigarrillos, víveres o licores. Ante la imposibilidad de cubrir estos costos, propietarios o administradores han debido cerrar sus negocios y desplazarse, ante el temor de represalias. El silencio es la norma de conducta, salvo en aquellos momentos cuando ha habido una

oportuna intervención de la Policía y de la justicia. Un ejemplo de ello es la detención y el proceso que se le sigue a alias Carlos Pesebre, jefe de la Odin de Robledo, que ha hecho de la extorsión uno de sus principales negocios. Otra fuente de extracción de rentas son los “mercados cautivos”, es decir la comercialización de productos alimenticios que los grupos armados están en capacidad de producir como las tradicionales y apetecidas arepas, o de comercializar como la cebolla o las fresas, los huevos y el licor adulterado (Entrevista líderes sociales, comunas 1 y 6) y (El Colombiano, 2011b). La pretensión de ejercer control sobre la economía barrial además de permitirles obtener una renta, se convierte en fuente de empleo para sus familiares y les hace ganar simpatía como “delincuencia social”. Se afirma que la banda de Los Triana ha montado su propia distribuidora de huevos e impide el ingreso de carros y empresas distribuidoras “ajenas a la comuna”.

Hay sitios que todo el mundo conoce, llegan los vendedores con los carritos reciben la fresa, al día siguiente la pagan. Hay un control meticuloso de lo que se vende, a quién se vende y en dónde se vende, pues ese es uno de los negocios curiosos con los cuales se están financiando, aparte pues de los negocios clásicos de droga, de armas. El negocio de la fresa, al igual que el negocio de la cebolla, tienen nombre propio. (Entrevista a líder social comunal, Medellín, 2012)

No es un fenómeno reciente. Ya desde mediados de la década del 90 la Banda de Frank, como lo recuerdan habitantes de la zona noroccidental, se distinguía por la invención de este modelo de “insertarse en el comercio de los negocios, de las tiendas y obligarlos a comprar cosas, a comprar productos que él empezaba a distribuir. Y luego con el que no le gustaba o con el que tenía algún inconformismo, hasta les llegó a quitar el negocio o los desplazaba” (Entrevista a líder social, comuna 6, Medellín, 2012)²³.

23 Al investigar el fenómeno de la mafia siciliana Gambetta (2010) hace referencia a una experiencia similar: “La Asociación de Pequeños Comerciantes de Palermo descubrió la forma como las familias de la mafia invertían en tiendas de mayoreo y después alentaban a los tenderos a invertir en esos almacenes a manera de salvaguarda para no ser estafado: ‘cómprale o véndele a A y estarás a salvo’ (78).

Otro sector afectado por la extorsión es el de los contratistas del Municipio, con responsabilidad de construcción de obras privadas y de beneficio público en los barrios. También en este caso ha habido “arreglos” mediante los cuales las bandas se hacen a una renta y los contratistas pueden adelantar las obras sin mayores tropiezos. Además de responder por el pago de la respectiva cuota, se negocia el empleo de las personas que ellos indican. La negativa de algunos contratistas a cumplir con este tipo de requerimientos ha tenido como consecuencia la parálisis de las obras y amenazas de represalias que han motivado la intervención de la fuerza pública para garantizar su culminación (El Colombiano, 2010).

La extorsión a los contratistas encargados de la construcción de mil casas gratuitas en la zona del Nuevo Occidente del corregimiento San Cristóbal, parte del programa bandera del Gobierno Nacional, fue examinada en un Consejo de Seguridad encabezado por el presidente Juan Manuel Santos en Medellín. Como respuesta, el Gobierno se limitó a ofrecer un acompañamiento policial a los contratistas amenazados.

No se trata solo de cobrar *vacuna* sino también del despojo de la vivienda a sus propietarios. Por tal razón, hay familias que se han visto forzadas a desplazarse, mientras delincuentes se apropian de un bien que para muchos representa el logro de una vida. El asesinato de un reclamante de tierras que se negó a ceder su propiedad a un integrante de la banda de Los Triana ha causado una demanda de justicia, pero sin que se haya logrado el esclarecimiento de este hecho ni la condena a los culpables (*Hora 13*, 2013).

La utilización de recursos públicos para la construcción y mantenimiento de espacios destinados a la recreación y el deporte y la labor desarrollada por el Inder (Instituto de Recreación y Deportes de Medellín) ha contribuido a una mejora en la calidad de vida de los habitantes de las comunas. La paradoja es que son estos los lugares en los que han ocurrido masacres y en donde los usuarios afrontan el acoso de combos que deciden quién, cuándo y cómo se puede hacer uso de estos espacios. El vaciamiento de estos escenarios, ante el temor de ser vacunado o víctima de una bala perdida

empobrece la vida barrial y las formas de socialización en las que la violencia no es el elemento vinculante (El Colombiano, 2012b).

En las áreas bajo su influencia los combos cobran puerta a puerta la vigilancia (\$2.000 semanales como mínimo). Esta práctica hace tiempo dejó de ser un fenómeno exclusivo de las comunas. En un informe del periódico El Colombiano se relata como administradores de urbanizaciones cerradas en sectores de clase media para “evitar problemas mayores han accedido al pago de una cuota camuflada en los rubros de seguridad y que a su vez ha engordado las entradas de Carlos Pesebre y su banda” (El Colombiano, 2013e).

El centro histórico de la ciudad, donde se calcula que circulan un millón de personas diariamente y que laboran otras trescientas mil, es el otro escenario de operación, esta vez de las Convivir (Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada para la Defensa Agraria). Dicha organización fue promovida por el gobierno de César Gaviria (1990-1994) con el propósito de mejorar la seguridad en el campo gracias a la colaboración de civiles con las autoridades. Sin embargo, los problemas que se generaron por los vínculos establecidos con los paramilitares motivaron su disolución.

Esta decisión representó un revés para el entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe, quien con el apoyo de su Secretario de Gobierno, Pedro Juan Moreno, promovió esta iniciativa en el Departamento. En Medellín se crearon en aquel momento varias Convivir que contaron con el apoyo de comerciantes y residentes en el centro histórico afectado por robos, atracos y la presencia de mendigos y drogadictos en las calles. La orden de disolver las Convivir no tuvo mayor efecto en Medellín, sino que, al contrario, fueron reorganizadas, lo cual les ha permitido seguir operando y cumpliendo con la función de vigilancia (extorsión por protección), la regulación de la informalidad y el control del orden público. El funcionamiento del centro comercial “El Hueco” en las inmediaciones del complejo de la Alpujarra, sede de la Alcaldía y la Gobernación de Antioquia, pone en evidencia la capacidad para combinar comercio legal y contrabando, y lavado de activos. A ese reconocido lugar acuden los más diversos sectores sociales para

obtener precios más favorables, sin temor a ser atracados, gracias a la vigilancia ejercida por las Convivir.

Pero las Convivir no se limitan a esta actividad. También operan como una agencia de cobro a cambio de proteger a todas aquellas personas que derivan su sustento de la prostitución, vendedores ambulantes (víveres, mercancía pirata) y de ladrones de celulares, escaperos, expendedores de drogas ilegales, quienes deben operar en territorios bien delimitados. Las tarifas para poder ofrecer sus servicios, según cálculos aproximados, oscilan entre los \$2.000 pesos (US\$1) y los \$15.000 (US\$7.50). A los vendedores ambulantes se les cobra un tributo que de acuerdo con el tipo de mercancía puede oscilar entre los \$5.000 pesos (US\$2,50) y \$20.000 diarios. (US\$10) Los días a cancelar son por lo general los sábados. (El Colombiano, 2011). Ante la dificultad para cubrir el valor de la cuota, muchos se endeudan con el *pagadiario*²⁴ o tienen que recurrir al empeño o la venta de los pocos bienes que les quedan.

El sistema de vigilancia de las Convivir se basa en una sectorización por cuadrantes, similar al modelo de la Policía, asignados a pequeños grupos encargados de realizar al menos tres rondas al día. Visten de civil y no portan armas para evitar ser detenidos, pero disponen de sitios en donde ocultarlas. A su vez, las Convivir deben rendir cuentas a varias Odin: Banda del Picacho, Caicedo, Los Triana y San Pablo, las cuales se articulan a su vez a la Oficina de Envigado (El Colombiano, 2011).

Las Convivir también se encargan del cobro del “pagadiario”, un sistema de préstamos ilegal de gran acogida debido a la facilidad con la que se logra obtener el préstamo, ya sea para el pago de la comida del día, la cuenta de servicios, completar el surtido de un negocio, desvarar un carro, llevar a los niños al médico, celebrar una fiesta o para financiar “el vicio”. No se necesita hacer ningún

24 Práctica ilegal que consiste en el préstamo de dinero a personas de escasos recursos sin exigirles los requisitos que piden los bancos. La cancelación de la deuda se debe realizar mediante cuotas que se amortizan a diario y con altos intereses. Los incumplimientos aumentan el costo de la deuda, y llevan a amenazas o al asesinato del deudor. Ver al respecto: Infrarrojo (2012)

trámite, basta establecer contacto con un intermediario. Se puede prestar desde \$10.000 pesos (US\$5) hasta sumas más elevadas, todo con el compromiso de cancelar día a día la cuota asignada y con elevados intereses que se van incrementando con el no pago oportuno. El pago de cuotas cada vez más difíciles de pagar, termina por convertirlo en una pesadilla para muchos deudores, quienes acuden a otros prestamistas para pagar sus obligaciones y evitar convertirse ellos y sus familiares en víctimas de represalias por el no pago de la deuda.

2. El microtráfico o narcomenudeo

Estos son los términos más utilizados para referirse a un fenómeno en alza, el consumo local de drogas ilegales, valorado como otro factor de inseguridad en las ciudades y en relación con lo cual el presidente Santos ha dado respuesta en los últimos meses con una campaña efectista destinada a eliminar lugares de expendio (plazas de vicio, *ollas*) que operan en las principales ciudades.

Pero ya en Medellín desde la década del 50 la prensa local registraba cultivos de la *yerba loca* en regiones de departamento y en áreas cercanas a Medellín. Las papeletas de marihuana se confeccionaban en fábricas que abastecían los sitios de expendio en algunos hoteles y cantinas localizados en el centro histórico de la ciudad y en la Plaza Minorista (El Colombiano, 1951). Su consumo era considerado un atributo del bajo mundo delincuencial y una actividad marginal hasta que un decreto expedido por el general Rojas Pinilla lo incluyó en los “estados de especial peligrosidad” (Diario Oficial, 1955) y se procedió a la detención de *marihuaneros* que eran remitidos a la cárcel La Ladera.

Esta situación cambia una década después, cuando se populariza el consumo de marihuana e irrumpen la cocaína, el bazuco (mezcla de base de coca con componentes altamente tóxicos para hacer rendir el producto). En el centro de la ciudad y en los barrios se instalaron centros de expendio (“plazas de vicio”) y se montó una red para garantizar el abastecimiento, distribución y

venta de la droga. Esto a su vez demandó la vinculación de personal de confianza encargado del transporte, la confección de papeletas y cigarrillos y de las *bolas* (paquetes) de marihuana, También, de la administración de las plazas y el control del territorio para impedir la presencia de otros competidores y para negociar el pago de sobornos a la Policía. Habitantes de los barrios, líderes sociales, expertos y funcionarios públicos coinciden en afirmar que agentes de policía mejoran sus ingresos con el cobro de *vacuna* a las plazas de vicio y con el suministro de información sobre la realización de allanamientos o facilitando el tránsito de los vehículos que se encargan de la distribución desde los centros de acopio a los barrios.

Aunque el funcionamiento de lugares de expendio desde hace tiempo forma parte de la cotidianidad barrial, es poco lo que se ha indagado sobre la situación de las familias dedicadas a esta actividad²⁵. Los resultados de una investigación realizada por el sociólogo César Tapias (2010) ponen en evidencia los impactos que los vínculos con este mercado ilegal generan en las formas de relación entre padres e hijos, afectadas por la invención de métodos para afrontar los riesgos que entraña la identificación del lugar, los operativos policiales, los probables *sapeos* por parte de los vecinos y los esfuerzos por establecer normas y códigos de comportamiento que puedan ser acatados por todos.

Se estima que en Medellín operan en la actualidad de unos 350 a 400 expendios, siendo la comuna 10 (el centro histórico) el lugar de mayor concentración de puntos de acopio, seguido muy de cerca por otros localizados en barrios populares. El decomiso de un cuaderno contable de cuatro jefes que concentran el negocio en la ciudad y al que tuvo acceso la prensa no deja dudas sobre los altos márgenes de rentabilidad. En solo 13 días por ejemplo, comercializaron 50.850 dosis, las que a un precio unitario promedio de 1.800 pesos (US\$1), muy bajo por demás, implica una facturación de 91,5 millones de pesos. (El Colombiano, 2010b).

25 Las plazas de vicio no son lugares de consumo. Estos corresponden a las *ollas*, ubicadas en zonas deprimidas del centro histórico.

Para adquirir una o varias dosis no es indispensable trasladarse a *la plaza*, ya que se puede obtener en las calles con vendedores ambulantes que la camuflan entre otros productos o en lugares públicos convertidos en lugares de expendio y consumo de drogas como el Parque del Periodista o el Parque de Bolívar.

A la masificación del consumo han contribuido estrategias de mercadeo dirigidas, entre otros, a los estudiantes de colegios ubicados en las áreas de influencia de combos y bandas. La droga es distribuida por menores de edad que hacen parte de combos que tienen familiares metidos en *la vuelta*²⁶. De acuerdo con el relato de uno de nuestros entrevistados:

Hay *baretos* [cigarrillos de marihuana] que parecen un fósforo y se lo venden por \$100 al niño, de prueba, y los van metiendo en la dinámica de 'nosotros somos los fuertes', el *bullying*, y van trayendo, y van viendo que aquel que lleva lonchera puede llevar los \$1.000 que le da el papá o sus \$2.000, entonces de esos \$2.000 'invítame dos o tres', les venden los bareticos, eso ya va armado desde afuera y así ya, cuando ya están en quinto de primaria, los que llegan a quinto ya son adictos, le mezclan perico a eso. Es una situación de la que se percatan muy tarde padres de familia, cuando se da la desvinculación del colegio y empiezan a tener como referente el combo y a rebelarse contra las normas de la casa (Entrevista habitante comuna 8. Medellín, 2013).

Con la expedición del nuevo Estatuto de Seguridad Ciudadana, las penas para el tráfico y porte de estupefacientes oscilan entre 128 y 360 meses, los cuales se reducen al rango comprendido entre 64 y 144 meses cuando se trata de cantidades menores. En el caso de la marihuana por ejemplo, corresponde a topes de 1.000 y 10.000 gramos respectivamente. Para neutralizar esta medida, los expendedores han optado por cargar pequeñas cantidades y camuflar la droga en la calle. Ante la demanda social de intervención frente a una violencia de combos atribuida a las disputas por el control de este rentable negocio ilegal, el presidente Santos le or-

26 Forma coloquial como se denomina estar en actividades ilícitas.

denó al director de la Policía, general Roberto León Riaño, la erradicación en un plazo perentorio de 70 días de 24 de estas *ollas* en 20 ciudades del país.

En Medellín, el comandante de la Policía Metropolitana informó que en el sector de Barbacoas se erradicaron diez casas de vicio, capturaron a 40 personas por los delitos de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes, se incautaron 13.813 mil dosis de drogas y se solicitaron cuatro medidas de extinción de dominio. (El Colombiano, 2013, 1 de junio). Como era previsible las *ollas* se han trasladado a otras zonas del centro.

IV. INSERCIÓN EN EL ENTRAMADO SOCIAL BARRIAL

El afincamiento en ciertos territorios y el poder contar con el apoyo de la población son dos elementos altamente valorados por las agrupaciones criminales a las que hemos hecho referencia. No solo está en juego el transporte de la mercancía ilegal, sino la obtención de otro tipo de rentas en sectores donde hay actividad comercial y concentración de la población. El barrio es un referente importante y más aún cuando se es de allí y se han construido vínculos afectivos y de confianza con la gente, aunque estos se pueden ver modificados por su desempeño, la capacidad de reacción de la población y los cambios en la correlación de fuerzas.

Los actores armados ilegales en la ciudad han tenido a su favor una reputación de violencia²⁷ que se ha cimentado durante varias décadas y que a su vez ha permitido mantener un clima de miedo. Ellos se aprovechan de las dificultades de padres de familia para estar pendientes de sus hijos o de la de los maestros y líderes sociales para ser respetados y se instituyen como los únicos capaces

27 Una reputación de violencia, de acuerdo con la definición del Grupo de Memoria Histórica en el informe *Basta ya!* (2013), es la imagen que un grupo armado construye deliberadamente de sí mismo, a partir de las acciones de violencia que desencadena para reforzar la credibilidad de sus amenazas y apuntalar su dominio a partir de la intimidación que proyecta desde su propia capacidad de daño.

de establecer el orden. Aunque en realidad, como coinciden en señalar residentes de estos barrios entrevistados, son precisamente estos actores quienes contribuyen al desorden al promover el consumo de drogas, la rumba (sobre todo durante los fines de semana) “donde la gente baila, consume marihuana, perico, y guaro” que “incapacita a las personas para cumplir con un trabajo y seguir con una vida normal”. En seguida se hará referencia a métodos de control que se han venido realizando durante las dos últimas décadas, de acuerdo a testimonios y fuentes de prensa.

1. Los dominios territoriales

Del control sobre determinados territorios depende la obtención de rentas provenientes de la extorsión o el microtráfico, el control de rutas de transporte de cocaína, armas o el hurto de combustible²⁸ para mantener a distancia a competidores que pretenden incursionar para disputar sus rentas y para “hacerse respetar”.

El establecimiento de una frontera invisible es el método preferido. Por haber incurrido en el error de cruzar esta línea que se supone es conocida por todos los habitantes del sector, se ha producido la muerte de varios jóvenes. Este fue el caso de un joven de 15 años que iba en bus para su casa, pero se quedó dormido y fue a dar al barrio vecino: “Allá lo cogieron los muchachos de un combo, llamaron a su tía y cuando la tenían en la línea, le dispararon al muchacho y ella escuchó los tiros por el teléfono. El cadáver lo hallaron con señales de tortura” (El Tiempo, 2012).

Hechos de este tipo generan un clima de miedo y enfrentan a la población al dilema de acatar o de negociar con el respectivo combo dueño del sector el pago de un “peaje” para poderse desplazar hacia un territorio vecino y así visitar a la novia, o algún familiar. Es la experiencia de Martín quien reconoce el pago de “un

28 Muestra de ello son las recurrentes disputas por el control occidental de la ciudad, zona estratégica de movilidad entre San Antonio de Prado y San Cristóbal, pasando por zonas periféricas de las comunas 16 (Belén) y 13 (San Javier), con salida hacia la subregión del Occidente antioqueño y el Urabá para el tráfico de narcóticos y armas, y el hurto de combustible al poliducto Medellín-Cartago.

impuesto” para poder atravesar callejones hasta la casa de su ama-da sin inconvenientes. En su billetera mantiene bien guardado un papel ocre, doblado en más de cuatro partes en el que dice: “hace constar que fulano de tal pagó los 10.000 pesos quincenales para pasar de tal lado a este otro ‘peaje” (El Colombiano, 2010).

La vigilancia sobre las fronteras se logra asignándole esta función a integrantes de los combos y con patrullajes que se refuerzan en las horas de la noche, los cuales, según lo perciben algunos habitantes, es un método copiado por la Policía. “La metodología que inventó la Policía por cuadrantes se la inventaron Los Triana, porque ellos tienen a una persona por cuadra a la redonda vigilando quién entra, quién sale, tienen unos esquemas muy grandes de ese tema de hacerle control al territorio” (Entrevista, líder social, comuna 1, 2012). Hacia el interior del barrio los integrantes del combo se *parchan* en determinados sitios para monitorear las entradas y salidas de la gente, de los vehículos o de la Policía.

Para aquellos jóvenes que se han especializado en estas labores de vigilancia, la noción de barrio y de ciudad se desdibuja, lo que cuenta es el control de una cuadra, una esquina o una manzana. El tener que vivir *enguetados*²⁹ los hace depender de la ayuda de la madre o de algún familiar para comprarse ropa o para tramitar alguna cita médica, pues deben ser atendidos en sus propios dominios. También para ellos el cruce de la frontera puede significar la muerte a manos de sus enemigos.

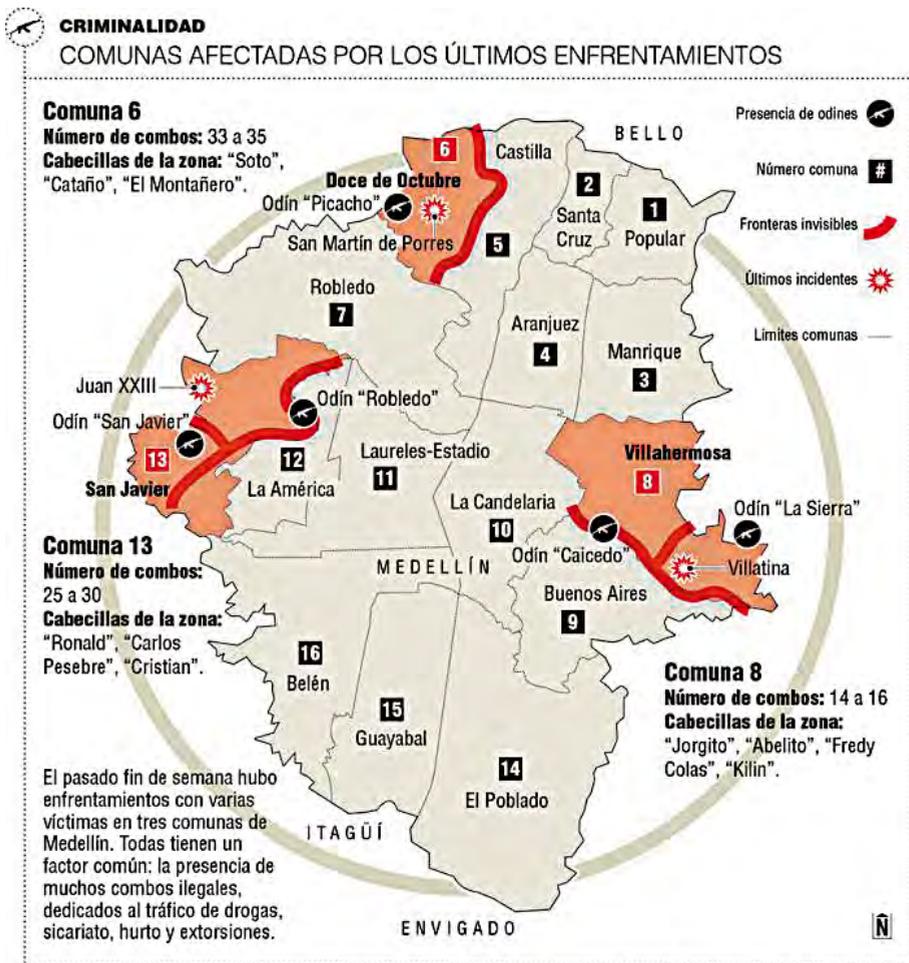
El delineamiento de una frontera es útil para hacer saber a los del combo vecino que allí están atentos a cualquier movimiento y para que “les tengan miedo”. Por esto se llevan a cabo acciones de hostigamiento: “Entonces solamente un *pelado* (menor de edad) no se puede parar al medio día en un morrito a disparar un proveedor, sin ninguna intención en particular, sino para afianzar que se está ahí” (Entrevista a habitante comuna 13, Medellín, 2012). El empleo de este mecanismo disuasivo no ha sido suficiente para evitar los enfrentamientos. Cuando estos ocurren, la población civil es la más

29 Viene de la palabra gueto.

afectada al tener que afrontar una situación de encierro debido a los toques de queda y el riesgo de convertirse en víctimas de “balas perdidas”.

El siguiente gráfico ilustra la diversidad de los territorios en los cuales se concentraban las disputas por el control y las fronteras invisibles al finalizar el año 2011.

Mapa No. 3
Comunas afectadas por los enfrentamientos. Noviembre de 2012



Fuente: Periódico El Colombiano, 2012.

El cese de los enfrentamientos y el levantamiento de fronteras ocupan un lugar central en las demandas de seguridad a las autoridades por parte de la población. Sin embargo, hasta el momento se han dado principalmente como resultado de las treguas o pactos establecidos por los combos y bandas enfrentados. Así sucedió recientemente con el “pacto de los fusiles”. Los habitantes de la urbanización El Limonar, escenario de enfrentamientos en los que ha participado la Policía como aliada de uno de los bandos, han manifestado su complacencia con el nuevo ambiente, porque ahora sí se puede andar por ahí tranquilo y casi no hay balaceras (El Tiempo, 2013b).

Para minimizar los riesgos derivados de la presencia de infiltrados en el territorio, se han adoptado medidas como el levantamiento de un registro sobre quiénes son las personas del barrio, de dónde provienen las familias que alquilan alguna vivienda o que transitan por ciertos lugares “donde nadie debe fisgonear”. La información que proporcionan las redes de colaboradores es de vital importancia cuando se temen acciones de represalia.

2. Amenazar, desaparecer y desplazar.

Mediante la amenaza, se busca advertir a la población de las consecuencias de colaborarles a sus rivales o a la Policía. Se acostumbra repartir panfletos dirigidos a los habitantes de un barrio o contra figuras en concreto que son consideradas sospechosas o sobre quienes se albergan dudas de su lealtad o que se han resistido a cumplir sus órdenes. Al hacer un balance de los casos que ha debido atender, un funcionario de la Personería observa:

...En los barrios las amenazas tienen un móvil diferente al de las universidades: se considera que la persona es un informante o porque habiendo sido conocido le dio por torcerse, o porque se resiste a hacer parte del grupo armado. Chicas que no quieren tener con ellos relaciones afectivas, que no les colaboran guardando armas y drogas. Por algún tipo de relacionamiento con la fuerza pública, relacionamiento territorial o sea alguien que es de

Independencias uno y se pasa a Independencias dos³⁰ donde tiene una novia y creen que aprovecha para llevar información, o por el comportamiento social, *'es un picao'*, la cosa más nimia. Ahora la novedad es que la amenaza va seguida de la orden de tener que abandonar el barrio. (Entrevista a funcionario de la Personería de Medellín, Medellín, 2012)

Con la desaparición forzada se pretende evitar llamar la atención de las autoridades en los territorios donde actúan, lograr mayor impunidad y reforzar un clima de miedo entre la población. El ocultamiento de los cuerpos se realiza por medio del desmembramiento y *encostalamiento*, la inhumación clandestina, el lanzamiento de los cadáveres al Río Medellín o la utilización de las escombrecas para ocultar los cadáveres. (Personería de Medellín, 2011)

El desplazamiento forzado se ha convertido en otro de los métodos preferidos para castigar a quienes no cumplen sus exigencias o se niegan a colaborar. También se usa para apropiarse de viviendas o para cortar la posibilidad de represalias por parte de familiares o colaboradores de la agrupación que ha sido derrotada. Medellín es la ciudad del país con los índices más elevados en desplazamiento forzado intraurbano³¹. Las bandas figuran como las responsables debido a sus amenazas, homicidios, agresiones físicas y reclutamiento forzado.

El fallo emitido por la Corte Constitucional ha permitido que miles de colombianos afectados por las denominadas bandas criminales (Bacrim) sean incluidos en la Ley de Víctimas (El Tiempo, 2013c). Dicha instancia ha insistido en la necesidad de reconocer tanto la modalidad del desplazamiento forzado intraurbano como de las dinámicas de violación sistemática de los derechos humanos por parte de los grupos armados ilegales denominados Bacrim.

30 Barrios de la comuna 13

31 Según Acción Social, a 31 de diciembre de 2011, en Medellín el desplazamiento forzado intraurbano representa más del 14 % del problema de desplazamiento forzado en la ciudad. Es decir, que para esa fecha, de 232.672 personas desplazadas que hay en Medellín, 32.123 corresponde a quienes se han visto forzados a abandonar sus lugares de residencia en la ciudad.

Esto es un logro importante para aquellas víctimas no reconocidas como tales por el hecho de no haber sido desplazadas por los actores del conflicto armado.

Aunque no se dispone de información precisa sobre acciones de violencia específica contra las mujeres por conductas desobedientes o por *sapas* (delatoras), hay elementos que permiten intuir que esto sí ha sido causal de asesinatos y desapariciones. Según el informe de derechos humanos de las mujeres, elaborado por las corporaciones Vamos Mujer y Mujeres que Crean, en los últimos cinco años el porcentaje del total de homicidios de la ciudad que tiene como víctimas a mujeres está alrededor del 8 % del total (Vamos Mujer, 2012).

También se busca el control de conductas que generan rechazo y que pueden entrañar algún riesgo para su propia seguridad: borrachos que provocan escándalos o quiebran los vidrios de una buseta, aquellos que roban a las personas del mismo barrio o que “consumen vicio” en lugares no autorizados o delante de los niños o en exceso. Los caídos en desgracia pueden ser objeto de sanción o convertirse en otras víctimas de “acciones de limpieza”, una práctica que en Medellín se remonta a la época de las Milicias y que cuenta con la aprobación de sectores que se consideran afectados en sus intereses y reclaman eficacia en el control de dichas conductas.

3. La contracara: “Benefactores” y “protectores” de la comunidad

Cultivar una relación de cercanía con la gente es una práctica de las organizaciones criminales. Pablo Escobar sentó un precedente al apoyar la construcción y dotación de canchas deportivas en los barrios de la zona nororiental, al tiempo que reclutaba jóvenes para encargarlos de las tareas más arriesgadas. Menos llamativa pero igualmente eficaz ha sido la labor de algunos jefes de bandas y combos, reconocidos por su contribución a la realización de festividades comunitarias en épocas de Navidad o el día

de la madre, los regalos para los niños y los favores a personas mayores y necesitadas. De esta manera varios jefes de banda se han ganado la simpatía de la gente. En la comuna noroccidental, por ejemplo, aún se recuerda al Tino, representante de la “delincuencia seria”:

Era el que dialogaba, el que le pagaba los servicios a la gente, una señora: ‘ah esa pobre señora’, entonces le daba los servicios. El Tino casi no consiguió plata. Cuando lo mataron tenía como dos buses, mientras que Frank era más burdo. Frank: ‘A ver, firmeme aquí, tome estos diez millones por el bus, si no firma entonces lo matan’. Esa pelea de esas dos formas de delincuencia, yo he visto es una pelea que lleva en esa zona nororiental y Medellín. He visto que es una pelea como de quince años, que la ha venido ganando como la cultura seria. (Entrevista a líder social, comuna 5 y 6, Medellín, 2013)

La intervención en la solución de conflictos que hacen parte del diario vivir se produce como respuesta a las demandas de personas que prefieren acudir a “los armados” antes que a la justicia³². Por lo general se trata de conflictos de índole familiar (maltrato, celos), disputas por linderos o por el no pago de deudas. A consecuencia de los fallos que han proferido, hay quienes han tenido que abandonar el barrio. En este punto se advierte una continuidad con el proceder de las bandas desde la década de los 80, quienes relegaron a un segundo plano la labor de mediación que desarrollaban los líderes comunales, lo que en opinión de personas que vivieron de cerca esta situación empoderó a los armados.

El contacto con la gente facilita la conformación de redes de colaboradores apoyadas en la familia, amigos y vecinos. La importancia de estas redes ha quedado en evidencia con la participación de sectores de la población en protestas y asonadas

32 Esta tendencia en Colombia, según Gaitán (2006:174), responde al temor a represalias y a las bajas expectativas de éxito que tiene la denuncia. Invertir en un abogado, rendir testimonio, aportar pruebas, generan el temor de terminar involucrados en los hechos que se denuncian.

para impedir la realización de operativos policiales en búsqueda de algunos jefes de bandas o combos. Pero también en ello se advierte el arraigo de una representación del bandido social que en el caso de Colombia tiene un antecedente reciente en el fenómeno del bandolerismo que prosperó en la Violencia de los años 50 (Sánchez, 2006).

Otro asunto que debe considerarse es la similitud con los métodos ya mencionados de control puestos en práctica por la guerrilla en áreas rurales en las cuales ha ejercido un dominio. Al analizar los intercambios y relaciones de las FARC con la población, Aguilera (2010: 105) toma en cuenta su intervención en la solución de conflictos, la definición de los casos más graves y el tipo de sanciones a impartir contra los infractores, que van desde un llamado de atención hasta amenaza y desplazamiento o la pena de muerte. Sin embargo su aplicabilidad en un contexto urbano no tiene el mismo impacto, debido a una mayor presencia del Estado y una heterogeneidad social y cultural traducida en la adopción de diversas formas de comportamiento y estilos de vida que riñen con la visión que comportan los “armados” sobre el tipo de orden a implantar. Los cambios en la correlación de fuerzas, fruto de las disputas entre bandas y combos o de la intervención policial, se erigen en un obstáculo para prolongar en el tiempo este tipo de controles.

En la década del 80, como lo recuerda Duncan (2013b), la Policía no tenía acceso a calles de barrios dominados por los bandidos y “si alguien cruzaba las fronteras invisibles de un barrio dominado por las bandas y los combos de Escobar y era sospechoso de ser policía, inmediatamente era ejecutado sin que mediara pregunta alguna”. En la actualidad y con todas las reacciones encontradas que genera la presencia de la Policía, los residentes en las zonas epicentro de la violencia se mantienen a la espera de que el Estado logre ejercer un control del territorio y de una institución policial que defienda a la gente y deje de transar con sus verdugos.

V. CAPACIDAD PARA INCIDIR EN LA ESFERA POLÍTICA

Es característico del crimen organizado el empleo de la corrupción de funcionarios públicos y de políticos para garantizar impunidad y la protección de sus empresas, sin embargo las posibilidades de consolidar este tipo de vínculos varía de acuerdo a los contextos y a las decisiones de criminales y narcotraficantes con respecto a un eventual protagonismo.

En Medellín, dos décadas después del fallido intento de Pablo Escobar de participación directa en política, la injerencia de alias Don Berna en las elecciones para Alcalde y en espacios de participación y organizaciones sociales aprovechando la condición de desmovilizado, vuelve a poner en evidencia el interés de los grupos armados ilegales por lograr una mayor influencia en el acontecer político de la ciudad y en la cooptación del Estado.

1. Los procesos electorales.

En las elecciones locales de 2003, en las que fue electo alcalde Sergio Fajardo, quien por primera vez en la historia de la ciudad no provenía del bipartidismo, a diferencia de las dos siguientes contiendas electorales (2007 y 2011) no hubo denuncias sobre injerencia ilegal ni constreñimiento de los grupos armados ilegales a favor de determinado candidato. Lo que sí marcó la dinámica electoral en los años 2007 y el 2009 fue la desmovilización de 864 integrantes del Bloque Cacique Nutibara, el 25 de noviembre de 2003, y los debates en torno a las condiciones en que esta se produjo. Entre otras razones por la participación política y social de los desmovilizados, tanto en espacios constituidos como mediante la creación de organizaciones propias, y sus relaciones conflictivas con organizaciones sociales ya existentes. Este es un punto que se desarrollará más adelante.

En las elecciones de 2007, el ambiente político es de polarización en torno a las figuras del candidato Alonso Salazar, el cual

le apuesta a la continuidad del proyecto político de Fajardo y se enfrenta al candidato tradicional Luis Pérez, ex alcalde, con unos resultados en los que sólo les separaron 33.741 votos. En estas elecciones, la Misión de Observación Electoral (MOE), organismo de la sociedad civil encargado de monitorear los riesgos por fraude corrupción y/o violencia en los procesos electorales, emitió una advertencia de alto riesgo electoral por motivos de violencia. En su comunicación, la MOE alertaba sobre ataques contra candidatos a corporaciones públicas, en los cuales fueron asesinados tres candidatos al Concejo y una candidata a la Junta Administradora Local de la comuna 13, Judith Vergara, integrante del Polo Democrático Alternativo.

Apenas unos días después de las elecciones, el candidato derrotado, Luis Pérez, formuló graves acusaciones contra Alonso Salazar, por la presunta incidencia de los paramilitares desmovilizados a su favor. El 5 de diciembre de 2008, más de un año después de las elecciones, el debate seguía, fue alimentado por una carta de alias don Berna, quien luego de ser extraditado a Estados Unidos en marzo de 2008, hacía referencia a un supuesto acuerdo de Salazar con los desmovilizados para un apoyo a su candidatura. Estas acusaciones llevaron al alcalde Salazar a solicitar una investigación de la Fiscalía General de la Nación, la cual terminó el 9 de julio de 2010. En ese fallo, la Fiscalía 28 delegada ante la Unidad Nacional contra el Terrorismo archivó el proceso (El Tiempo, 2010, 30 de julio).

Durante el primer año de gobierno de Salazar se presentó una fuerte lucha por la gobernabilidad de la ciudad. En ésta intervinieron por un lado el gobierno municipal liderado por el Alcalde y, por el otro, una alianza criminal conformada por integrantes de grupos armados ilegales y desmovilizados, quienes actuaron en alianza con representantes de partidos políticos, el derrotado candidato Luis Pérez y altos funcionarios de organismos de seguridad como el Director Regional de Fiscalías de Medellín, Guillermo León Valencia Cossio (hermano del entonces Ministro del Interior Fabio Valencia), y el comandante de la Policía Metropolitana Marco Antonio Pedreros, entre otros. Esta alianza criminal pretendió generar

un ambiente de desgobierno para la administración de la ciudad, y apeló a mecanismos como el desprestigio del Alcalde, la promoción de la revocatoria de su mandato, así como un marcado incremento de las acciones de violencia en varios barrios de la ciudad con repercusión en un aumento de los homicidios (El Espectador, 2008).

La grave constatación de la penetración criminal en la Fiscalía Seccional de Medellín, que terminó con la captura y condena del director Valencia Cossio a 15 años de cárcel por apoyo a grupos paramilitares, produjo incluso la visita en agosto del 2008 a Medellín del Fiscal General de la Nación, Mario Iguarán, quien ofreció sus disculpas a la ciudad por el “acto bochornoso, vergonzoso y delin cuencial en el que están involucrados no sólo funcionarios de otras instituciones como el Ejército y la Policía, sino desafortunadamente la cabeza de la (Fiscalía) seccional” (El Tiempo, 2013c).

La administración de Alonso Salazar vivió también una coyuntura de crisis del proceso de desmovilización, luego de más de cuatro años de debates sobre la autenticidad de la desmovilización y las denuncias sobre el mantenimiento de una estructura criminal latente en la ciudad, en torno a prácticas ilegales de control sobre la población por parte de los desmovilizados y en relación a los límites de una política local de atención a los desmovilizados que dejaba muchos interrogantes (Amnistía Internacional, 2005). El proceso finalmente explota con la extradición de alias don Berna, el 13 de mayo de 2008, y la confrontación entre diferentes facciones de la Oficina de Envigado que se habían mantenido activas durante el proceso de desmovilización.

A pesar de los esfuerzos de los grupos armados ilegales de la ciudad por influir y determinar los resultados electorales en el 2007, los resultados en una abrumadora mayoría no les favorecieron. Su candidato a la Alcaldía no fue elegido. Tampoco obtuvieron buenos resultados con sus candidatos al Concejo. Así mismo, de 18 candidatos que presentaron los desmovilizados a Juntas Administradoras Locales, sólo salió electo uno en la comuna 8, John William López, alias Memín, quien luego fue capturado y condenado el 13 de marzo de 2009 a 22 años de cárcel por los delitos de des-

plazamiento forzado, concierto para delinquir y constreñimiento ilegal agravado, contra habitantes de dicha comuna.

En las elecciones para alcaldía de 2011, de nuevo se presentó una fuerte polarización, entre una propuesta de continuidad esta vez en cabeza del candidato Aníbal Gaviria del Partido Liberal, y Luis Pérez, derrotado en las elecciones anteriores. Esta vez la diferencia fue de 17.385 sufragios a favor del primero.

El debate electoral estuvo muy agitado los últimos días debido a las graves denuncias realizadas a comienzos de octubre de 2011 por el alcalde Alonso Salazar sobre alianzas entre sectores criminales de la Oficina de Envigado, específicamente la facción liderada por alias Sebastián, y las campañas de algunos candidatos al Concejo de la ciudad, así como el presunto favorecimiento a la campaña de Pérez Gutiérrez.

Según el Alcalde, grupos armados ilegales realizaron actos proselitistas en los cuales se promovieron ciertas candidaturas, mientras se prohibió o restringió la presencia de candidatos de otros grupos políticos. También denunció pactos en sectores de la ciudad como la comuna 8, la 1 y la 6, para favorecer intereses de ciertos candidatos (Partido Cambio Radical) y actividades proselitistas con la presencia de líderes políticos e integrantes de la Corporación Democracia.

Estas denuncias calentaron el debate electoral a menos de tres semanas de las elecciones y provocaron reacciones airadas de los sectores políticos y candidatos señalados por el Alcalde de hacer parte de esta alianza criminal. Así mismo la Procuraduría General de la Nación, con inusual prontitud, abrió investigación preliminar contra el Alcalde por presunta participación en política, la cual terminó en fallo de primera instancia del 29 de febrero de 2012 con su destitución y su inhabilidad por doce años para ejercer cargos públicos, fallo que fue confirmado en segunda instancia, el 3 de mayo de 2013.

Una muestra de la complejidad de la última campaña electoral de Medellín y sus preocupantes niveles de violencia son los informes de la MOE con corte a octubre 26 de 2011. Según éstos, de los

2.465 reportes recibidos en todo Colombia, 421 fueron de Antioquia (17 % del total) y, de estos, 56 lo fueron de Medellín, es decir el 13 % de los del departamento.

Los principales motivos de reporte fueron 13 por vinculación de campañas políticas con grupos armados ilegales y 10 por violencia política, la cual incluye amenazas, asesinatos y atentados. En los casos relacionados, se identifican hechos como la conducción de presidentes de juntas de acción comunal para ordenarles por quién votar, los asesinatos de dos líderes sociales, acciones de constreñimiento ilegal para favorecer ciertas candidaturas, investigaciones de la Fiscalía a candidatos por vínculos con grupos armados ilegales. Es de destacar que muchas de las denuncias recibidas por la MOE concuerdan con las denuncias hechas en su momento por el alcalde Alonso Salazar.

2. El papel de la Corporación Democracia

Medellín tuvo dos momentos de desmovilización de grupos paramilitares. El primero fue el 25 de noviembre de 2003, en el cual se desmovilizó el Bloque Cacique Nutibara en el Palacio de Exposiciones de la ciudad, acto en el cual participaron 868 integrantes. El segundo ocurrió el 1 de agosto de 2005, con la desmovilización de 2.033 personas del Bloque Héroes de Granada en el corregimiento Cristales de San Roque, nordeste antioqueño.

Desde el inicio de la desmovilización se tenía prevista una cobertura política del proceso y una organización que sirviera como interlocutora entre los desmovilizados y los gobiernos, nacional y local. Por esto, desde la firma del acuerdo de 2003 ya se manifestaba en el denominado Acuerdo de Paz entre el gobierno nacional y los reincorporados del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia³³ que el gobierno nacional reconocía a la

33 Acordado en el municipio de La Ceja, Antioquia, el 10 de diciembre de 2003, firmado por Fabio Acevedo Monsalve y Giovanni Marín como miembros representantes de los desmovilizados

organización no gubernamental Corporación Democracia como la representante de los reincorporados del Bloque Cacique Nutibara, “con quien [sic] se mantendrá una interlocución permanente para el seguimiento, desarrollo y apoyo del proceso de reincorporación”. El Gobierno Nacional, la Alcaldía de Medellín y la Corporación Democracia diseñarán los programas de seguimiento, desarrollo y apoyo al proceso de reinserción. Posteriormente, la Corporación Democracia se creó formalmente ante la Cámara de Comercio de Medellín, el 16 de enero de 2004. A partir de allí, dicha entidad desplegó una amplia red organizativa que estaba presente en prácticamente todos los lugares de la ciudad en los cuales se concentraban personas desmovilizadas, construyó grupos de desmovilizados por barrio, comuna y zona y desarrolló una estructura de control y mando constituida por coordinadores, cada uno de los cuales tenía a su cargo un número cercano a los 20 integrantes. La Corporación Democracia se convirtió en el referente para la interlocución con el Gobierno, especialmente con el Programa de Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín dirigido primero por Gustavo Villegas³⁴, entre el 2004 y el 2006, y luego por Jorge Gaviria, hasta mediados del 2009.

El primer período de la actuación de la Corporación Democracia (2004-2007) se caracterizó por su fluida relación con diferentes autoridades públicas, así como por las dificultades de las organizaciones sociales de encontrar eco a las denuncias en torno a las presiones y amenazas realizadas por los desmovilizados integrantes de los grupos de la Corporación Democracia. No fue fácil la relación en torno a este tema, ni con las diferentes dependencias de la administración municipal, ni tampoco con la delegación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA), como lo señaló en su momento la Unidad Permanente de la Personería de Medellín en sus informes periódicos sobre derechos humanos (Restrepo, 2011).

34 Gustavo Villegas fue secretario de Gobierno de la ciudad durante el año 2007, cuando Alonso Salazar se retiró de la Secretaría para ser candidato a la Alcaldía de la ciudad. Posteriormente se vio involucrado en las denuncias como partícipe de la conspiración para derribar al Gobierno de Alonso Salazar y fue desvinculado del gobierno local.

No obstante, en tanto la Corporación Democracia estaba atada de manera indisoluble a la suerte de la Oficina del narcotráfico de Envigado, las contradicciones al interior de la estructura criminal se reflejaron en la vida de la organización, la cual estaba en la mira de las autoridades judiciales de Colombia y Estados Unidos, pero también porque una buena parte de sus líderes cayeron en ajustes de cuentas en su interior.

Luego se dan otros hechos como el asesinato de uno de sus principales líderes y vocero nacional de las Autodefensas, Severo Antonio López, alias Job, conocido por haber participado en reuniones con personal de alto nivel del gobierno Uribe Vélez en el Palacio Presidencial con el fin de concertar acciones en contra de la Corte Suprema de Justicia, organismo que estaba liderando en ese momento las investigaciones sobre nexos entre líderes políticos regionales y los grupos paramilitares. Alias Job fue asesinado el 28 de julio de 2008 en un restaurante de Medellín.

La estocada final a la Corporación Democracia la propinó la Fiscalía General de la Nación el 16 de abril de 2009 ante un juez de garantías durante la legalización de la captura de José Leonardo Muñoz Martínez, alias 'Douglas', quien al parecer estaba al frente de la Oficina. Durante la diligencia judicial, la Fiscal 14 Especializada de Bogotá, Berta Cecilia Díaz Neira, señaló directamente a Giovanni Marín y a Fabio Acevedo dirigentes de la Corporación, como los líderes que "representaban en Medellín los intereses de la banda Los Paisas, una estructura rural de la Oficina (Verdad Abierta, 2011).

3. Incidencia en espacios de participación social y comunitaria

En los últimos años se han presentado denuncias de organizaciones sociales sobre contradicciones con grupos armados ilegales en procesos de participación social, pero también por la incidencia ilegal en espacios de participación y representación como las Jun-

tas Administradoras Locales, las Juntas de Acción Comunal y los Comités de Presupuesto Participativo.

Durante la primera fase del proceso de desmovilización paramilitar algunas de las denuncias se centraban en los choques entre la Corporación Democracia y otras organizaciones conformadas por desmovilizados (Corporaciones Comunas de Vida y Paz, La Sierra con Futuro, Cementerio San Pedro, Campo Santo, entre otras) y las organizaciones comunitarias de la ciudad. Las denuncias se originaban por las presuntas acciones de intimidación ejercidas por estas organizaciones, lo cual se agravaba dado el poder militar que estas estructuras mantenían en la semiclandestinidad. En este sentido, los conflictos comunitarios estaban marcados por la confrontación entre organizaciones civiles y estas otras que poseían un evidente poder de intimidación y destrucción.

Posteriormente, luego del fracaso del proceso de desmovilización y en el marco de las múltiples acciones de violencia que se presentaban en los barrios de la ciudad, organismos de derechos humanos no gubernamentales e incluso estatales, del Ministerio Público (Observatorio de Seguridad Humana, 2011), advertían sobre diferentes modalidades de captura de recursos públicos mediante acciones como;

- Toma de organizaciones sociales y acciones de contratación de recursos públicos con el Estado local, en especial mediante la penetración de las Juntas de Acción Comunal³⁵.
- Apropiación de recursos públicos mediante diferentes modalidades de extorsión a contratistas, quienes eran obligados a transferir recursos públicos mediante acciones como cobro en dinero, en especie (materiales de construcción) o en la obligación de contratar mano de obra.

35 Modalidad que fue puesta en práctica por las milicias sobre todo en la comuna 13, donde eran ellos quienes ponían o intentaban comprar a los presidentes de juntas de acción comunal para que les entregaran parte de los recursos públicos a los que tenían acceso (Entrevista a habitante comuna 13, Medellín, 2012).

- Extorsión a destinatarios de políticas públicas de subsidios, como por ejemplo a usuarios del programa Fuerza Joven dirigido a jóvenes integrantes de grupos armados ilegales, quienes recibían ayudas en dinero a cambio de que se retiraran de las actividades ilícitas.

Mediante estas acciones no sólo se apropian de ingentes cantidades de dinero para el fortalecimiento de las organizaciones ilegales, sino también de la legitimidad pues éstas se convierten en intermediarios de las demandas de la ciudadanía y en “gestores” ante la institucionalidad de la ciudad. Esto explica en parte que en los últimos años se hayan presentado graves desórdenes en algunos barrios ante la acción de control de la Policía o en operativos que buscan capturar líderes e integrantes de los grupos armados ilegales, ocasiones en las cuales se han presentado confrontaciones entre pobladores y la fuerza pública. Pero tal vez lo más significativo es la constatación en diferentes procesos electorales de la existencia de una red clientelista al servicio tanto de los intereses de políticos como de grupos armados ilegales asociados.

VI. EN LA BÚSQUEDA DE SALIDAS AL LABERINTO

Los problemas de violencia que ha vivido Medellín han provocado que los temas de la seguridad y la convivencia hayan aparecido como un elemento central de preocupación de diferentes sectores sociales y políticos, al tiempo que ha sido un componente fundamental de la acción institucional en la que han confluído entidades de carácter nacional, departamental y municipal³⁶.

36 Si miramos los planes de desarrollo desde 1992, se pueden identificar a manera de antecedentes las definiciones hechas por los gobiernos municipales desde la administración de Luis Alfredo Ramos (1992-1994), la cual identificó la necesidad de un Plan Estratégico de Seguridad (PES). Así mismo, esta Alcaldía definió la conformación de la Asesoría de Paz y Convivencia. Luego en el gobierno de Sergio Naranjo (1995-1997) se define como centro la implementación de un Plan Integral de Seguridad y Convivencia bajo el lema “Con seguridad habrá seguridad.” En la Alcaldía de Juan Gómez Martínez (1998-2000), el centro de la acción institucional local estuvo en la constitución del Programa de Convivencia Ciudadana, diseñado y ejecutado con un empréstito del BID con un monto de 25 millones de dólares. En estos dos últimos gobiernos se mantiene

Aunque la responsabilidad central del diseño y ejecución de las políticas públicas es un asunto de carácter esencialmente estatal, es claro que la participación de la ciudadanía y de las organizaciones de la sociedad civil es un asunto para destacar. En Medellín existe una amplia red de organizaciones sociales y de líderes que conocen el tema y poseen una larga experiencia en el diseño e implementación de proyectos sociales orientados a la prevención y generación de alternativas a la violencia.

En consonancia con un enfoque restringido de la seguridad, se le ha dado una gran trascendencia a la destinación de una enorme cantidad de recursos para mejorar sistemas de comunicación y movilización, una obsesión tecnológica expresada en la opción por un conjunto de dispositivos de video vigilancia. E incluso con expresiones de lo que se denomina el populismo punitivo, es decir, el impulso a propuestas que ven en el incremento de las penas y la reducción de garantías, las claves para mejorar los problemas de seguridad.

Por momentos se ha expresado en la ciudad en materia de seguridad y convivencia una idea restringida y/o instrumental de la participación ciudadana, según la cual ésta sólo debe estar enfocada en la asistencia a eventos, y su función es ser apoyo a la fuerza pública, sin mayores reconocimientos sobre su rol autónomo de seguimiento y control a la gestión pública.

En muchas de las acciones institucionales, a pesar de que existe una importante labor de diagnóstico, no hay un tratamiento di-

además en funcionamiento la Asesoría de Paz y Convivencia. En la alcaldía de Luis Pérez, en su Plan de Desarrollo "Medellín competitiva", se contempló un componente de convivencia y otro de seguridad ciudadana, aunque se terminó por privilegiar este último. Además se plantearon programas como "Compro la guerra" y la Política pública de seguridad y de reincorporación a la civilidad. En la administración de Sergio Fajardo (2004-2007) se adoptó el Plan de Desarrollo "Medellín compromiso de toda la ciudadanía", con sus programas de prevención de la violencia, fortalecimiento de la institucionalidad y el componente de paz y reconciliación, con un sistema de seguimiento y monitoreo a los procesos de desmovilización. En la administración de Alonso Salazar, las políticas públicas en materia de seguridad y convivencia se pueden rastrear en las líneas 1 y 2 del Plan de Desarrollo y en la política pública "Medellín más segura, juntos sí podemos", en la cual se reorientó la política de seguridad y convivencia.

ferenciado para las amenazas a la seguridad ni tampoco para los riesgos de la vida, integridad y libertad derivados de aquellas conductas que pueden ser catalogadas como contravenciones pero no como delitos. A veces se homologa, por ejemplo, la venta de drogas de uso ilícito con la venta informal de mercancías en la vía pública.

Pero es de notar que se han puesto en marcha acciones orientadas a la prevención de la violencia mediante el diseño de programas destinados a atención de jóvenes en alto riesgo, con gran probabilidad de vincularse a bandas o combos y en los cuales se contempla la atención a problemas de drogadicción, vinculación a ofertas educativas y culturales, actividades de servicio social y preparación para el desempeño laboral.

En lo que constituye un logro en las políticas de seguridad, mediante Acuerdo Municipal 022 de 2003, se aprobó una política para “la prevención y atención de las violencias sexuales que afectan a la ciudadanía, principalmente a mujeres, niñas y niños en la ciudad de Medellín”. Así mismo, desde el gobierno de Sergio Fajardo se creó el programa de Atención a Víctimas del Conflicto Armado y, luego en el gobierno de Salazar, se sumó la Gerencia de Desplazamiento Forzado. Hoy en día, ambas dependencias se han unificado como Unidad Municipal de Atención a Víctimas.

Aunque en sentido estricto la desmovilización de grupos armados ilegales no es parte de las políticas de seguridad y convivencia de la ciudad, sí es evidente que los diferentes procesos que ha tenido la ciudad ameritan algunas consideraciones.

En nuestro país no es competencia del Estado local emprender estos procesos, los cuales están sujetos a la normatividad nacional y a la autorización del gobierno central para su concreción. Sin embargo en la ciudad, gracias a la gestión y decisión del gobierno local, se han concretado al menos tres procesos de desmovilización los cuales ya se han mencionado: el de las Milicias en 1994, el MIR- COAR en 1998 y el bloque Cacique Nutibara en 2003. Aunque estas experiencias, a excepción del MIR, tuvieron efectos contrarios a los esperados, denotan el interés por explorar otros caminos diferentes a la represión.

El asunto más polémico es el relacionado con los pactos de convivencia entre actores armados y en los que habido alguna mediación por parte de la Alcaldía y de la iglesia y que han contado con el apoyo de algunas organizaciones sociales.

Los antecedentes principales de estos procesos se dieron en la segunda mitad de la década del 90, cuando se creó en la Alcaldía de Medellín la Asesoría de Paz y Convivencia, la cual tenía entre sus funciones promover pactos de convivencia entre los grupos armados de la ciudad. Esto incidió en un descenso de los homicidios, a cambio de lo cual se convertía a los líderes de los grupos en interlocutores centrales para la definición de planes sociales en sus comunidades (Sepúlveda, 2010). Para 1999 se habían establecido en las ciudades procesos de mediación y pactos que comprometían a cerca de 160 bandas, combos y milicias para cubrir a unas 3.000 personas en 86 sectores de la ciudad (Martin, 2012: 328)

Dichos pactos fueron de corta duración, debido a las falencias en los seguimientos y, ante todo, porque coincidieron con reclutamientos y la centralización de la Oficina de Envigado, así como con la aplicación de la estrategia contrainsurgente en la ciudad. Al respecto son relevadoras las recientes declaraciones de Henry de Jesús López, alias Mi Sangre, detenido en Argentina:

...Yo inicio un proceso de resolución de conflictos con tres bandas de Robledo Miramar, acompañado con el cura párroco del barrio. Hacemos unos pactos de no agresión, logró tener un buen impacto y monseñor Darío Monsalve, de la Pastoral Social, nos pide que extendamos esa experiencia (...) La idea era convencer a los jóvenes de sus posibilidades de liderazgo, pero sin dejar de adoc-trinarlos en la guerra contrainsurgente (...) planificamos política y socialmente el trabajo en Medellín (...) En la Iglesia nadie sabía de ese doble trabajo. En la Alcaldía de Medellín, el único que no sabía de ese proceso de las Autodefensas era el asesor de Paz y Convivencia, Luis Guillermo Pardo, porque en la Alcaldía no le tenían confianza (Verdad Abierta, 2013).

Lo dicho por Alias Mi Sangre evidencia los efectos perversos de este tipo de decisiones en las que, en lugar de afirmarse la pre-

sencia del Estado, dispuesto a ejercer un monopolio de la fuerza, se terminó por negociar el desorden y, por consiguiente, un fortalecimiento de los actores armados ilegales.

Lo expuesto hasta aquí permite apreciar la importancia que por más de dos décadas se le ha conferido a las políticas en seguridad y convivencia en la ciudad, algunos de sus aciertos y errores, los cuales son expresión de intereses y de enfoques divergentes en torno a la seguridad, pero también de intentos de avanzar en la construcción de ciertos consensos entre Estado y sociedad.

No existe ninguna duda de que en el territorio de la ciudad no debe existir ninguna otra fuerza distinta a la fuerza pública como encargada de la regulación legal de la seguridad y la convivencia. Sin embargo, tampoco debe existir ninguna duda de que como contraprestación obligatoria la fuerza pública debe actuar sin sombras, en el marco de la legalidad y sin la menor connivencia con los grupos armados ilegales.

Hay una gran cantidad de proyectos y programas que han demostrado su utilidad y pertinencia y que no sólo deben ser mantenidos sino fortalecidos. En especial, programas como los que han existido en el pasado para prevenir las dinámicas de vinculación de niños, niñas y adolescentes a los grupos armados ilegales, el fortalecimiento de la institución educativa como un lugar central para las actividades de prevención, los programas de atención a víctimas, las iniciativas de memoria histórica y de atención a personas interesadas en abandonar de manera definitiva la violencia.

La experiencia de Medellín demuestra la necesidad de innovar en el diseño y aplicación de una política criminal que permita acometer a fondo la tarea de la desestructuración de las organizaciones criminales y que no esté solo orientada a la captura de jefes (los “objetivos del alto valor”), sino a afectar su poder económico. También se deberían probar otras opciones como la despenalización del consumo de algunas drogas, lo cual puede contribuir a la construcción de una nueva mirada frente al complejo fenómeno de la drogadicción.

Finalmente, en materia de convivencia es necesario hacer un enorme trabajo en el campo ético que tenga como objetivo la generación, difusión y fortalecimiento de valores democráticos y de una cultura de la legalidad. Acciones en este sentido en espacios públicos, como la institución educativa, el espacio público barrial y urbano en general, y el fortalecimiento de las organizaciones y movimientos sociales, son claves para la deslegitimar la violencia y socavar las bases que sustentan el poder de las mafias.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguilera, M., *Las FARC. La guerrilla campesina (1949-2010 ¿Ideas circulares en un mundo cambiante?* Bogotá: Colombia: Corporación Nuevo Arco Iris, 2010.
- Alcaldía de Medellín. (2011). *Encuesta de Calidad de Vida 2011*. Medellín, Colombia.
- _____ (2012). *Proyecto de acuerdo Plan de Desarrollo "Medellín un hogar para la vida" 2012-2015*. Medellín, Colombia.
- Amnistía Internacional (2005). Informe. Recuperado de: http://www.pbi-colombia.org/fileadmin/user_files/projects/colombia_formacion/files/Documentos/Paramilitarismo/0509_AI-desmovilizacion_en_Medellin.pdf
- Angarita, P. Gallo, Héctor; Jiménez, Blanca Inés (Ed) (2008). *Dinámicas de guerra y construcción de paz: estudio interdisciplinario del conflicto armado en la Comuna 13 de Medellín*. Medellín, Colombia: Universidad de Antioquia.
- Análisis Urbano (2013). *Se reafirma la existencia del Pacto del Fusil en Medellín*. Recuperado de: <http:// analisisurbano.com/2013/08/04/se-reafirma-la-existencia-del-pacto-del-fusil-en-medellin/>
- Daza, A. (2001). *Experiencias de intervención en el conflicto urbano*. Medellín, Colombia: Alcaldía de Medellín.
- Duncan, G. (2013). La división del trabajo en el narcotráfico. Mercancía, capital y geografía del Estado. En Giraldo, J (Ed.), *Economía criminal y poder político*. (pp 113-161). Medellín, Colombia: Eafit-Colciencias.
- _____ (2013b). Una lectura política de Pablo Escobar. En *Revista Coherencia*. Vol. 10, núm. 19, pp 207-234

- _____ (2005). *Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los señores de la guerra*. Bogotá, Colombia: Universidad de los Andes.
- Diario Oficial (1955). Decreto No 0014, 19 de enero.
- El Colombiano. (1951). Fumaderos de marihuana.
- _____ (2002). *Medellín. 20 años de llanto en las calles*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/proyectos/serieselcolombiano/textos/conflicto_urbano/bandas.htm
- _____ (2010). *El empresario y "La Oficina"*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/E/el_empresa_y_la_oficina/el_empresa_y_la_oficina.asp
- _____ (2010). *Vacunas alimentan guerra.*, Recuperado de: www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/O/obras_vacunadas_por_combos/obras_vacunadas_por_combos.asp?pag=2&todos=1
- _____ (2010b). *Botín de guerra en Medellín supera los 700 millones de dólares*. Recuperado de [http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/botin_de_guerra_en_medellin_supera_los_us\\$700_millones/botin_de_guerra_en_medellin_supera_los_us\\$700_millones.as](http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/botin_de_guerra_en_medellin_supera_los_us$700_millones/botin_de_guerra_en_medellin_supera_los_us$700_millones.as)
- _____ (2010c). *Combos cobran "peaje" a las visitas de novios*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/combos_cobran_peaje_a_las_visitas_de_novios/combos_cobran_peaje_a_las_visitas_de_novios.asp
- _____ (2011). *Círculos solidarios. Garrote al pagadiario* Recuperado de http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/C/circulos_solidarios_garrote_al_pagadiario/circulos_solidarios_garrote_al_pagadiario.asp
- _____ (2011b). *Huevos y arepas negocio de los combos*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/H/huevos_y_arepas_negocio_
- _____ (2012). *Así se organiza el crimen en Medellín y Antioquia*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/asi_se_organiza_el_crimen_en_medellin_y_antioquia/asi_se_organiza_el_crimen_en_medellin_y_antioquia.asp
- _____ (2012b). *Investigan microtráfico y vacunas en canchas públicas de Medellín* Recuperado de: <http://www.elcolombiano.com/article/79349>
- _____ (2012c). *Así exterminaron a la temible banda 'La Terraza'*. Recuperado de: <http://www.ecbloguer.com/revelacionesdelbajomundo/?p=5071>

_____ (2013). *Botín de guerra en Medellín supera los 700 millones de dólares* Recuperado de: [http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/botin_de_guerra_en_medellin_supera_los_us\\$700_millones/botin_de_guerra_en_medellin_supera_los_us\\$700_millones.asp](http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/botin_de_guerra_en_medellin_supera_los_us$700_millones/botin_de_guerra_en_medellin_supera_los_us$700_millones.asp)

_____ (2013a). *Inversión social en Medellín no logra parar las balas*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/I/inversion_social_en_medellin_no_logra_parar_las_balas/inversion_social_en_medellin_no_logra_parar_las_balas.asp

_____ (2013b). *A noviembre, 25,2 por ciento menos de homicidios en Medellín*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/a_noviembre_252_por_ciento_menos_de_homicidios_en_medellin/a_noviembre_252_por_ciento_menos_de_homicidios_en_medellin.asp

_____ (2013c). *Botines de una guerra que no acaba*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/B/botines_de_una_guerra_que_no_acaba/botines_de_una_guerra_que_no_acaba.asp

_____ (2013d). *Aun sin balas persiste el temor en la comuna 13*, Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/A/aun_sin_balas_el_temor_persiste_en_la_comuna_13/aun_sin_balas_el_temor_persiste_en_la_comuna_13.asp

_____ (2013e). *Los "pagos" de las urbanizaciones. Las cuentas criminales*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/L/las_cuentas_criminales/las_cuentas_criminales.asp

El Espectador (2008). *El pulso político en Medellín*. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso90799-el-pulso-politico-medellin>

_____ (2013). *Queríamos que Castaño llegara a la presidencia*. Recuperado de:

<http://www.elespectador.com/noticias/judicial/queriamos-castano-llegara-presidencia-articulo-449263>

_____ (2013b). *El pacto criminal en Medellín*. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/noticias/judicial/pacto-criminal-medellin-articulo-450844>

_____ (2013c). *Criminalidad sistemática*. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/opinion/editorial/articulo-421027-criminalidad-sistemica>

El Mundo (2010). *La ciudad se encuentra en tregua*. Recuperado de: <http://www.elmundo.com/portal/pagina.general.impresion.php?idx=140406>

- El Tiempo (2000). *En estampida la Terraza* Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1213958>. 14 de diciembre
- _____ (2010). *Fiscalía archivó el proceso penal que adelantaba en contra del alcalde de Medellín*, Alonso Salazar, Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/colombia/fiscalia-archivo-el-proceso-penal-que-adelantaba-en-contra-del-alcalde-de-medellin-alonso-salazar/7834545/1/home>
- _____ (2012). *La guerra urbana no le da tregua a Medellín*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12371884>
- _____ (2013). *Extorsión: el azote de medio país que mueve 2 billones de pesos al año*. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/multimedia/especiales/extorsion-en-colombia/articulo-web-nota_interior_multimedia-12702998.html
- _____ (2013b). *'Pactos de fusil' sí llevan seguridad a barrios de Medellín*. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/articulo-web-new_notas_interior-13052002.html
- _____ (2013c). *Iguarán pidió perdón por líos en la Fiscalía*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3079347>
- Gambetta, D. (2010). *La mafia Siciliana el negocio de la protección privada* México: Fondo de Cultura Económica.
- Garay, J. y Salcedo. (2012). *Narcotráfico, Corrupción y Estados*. México: Debate.
- Garzón, J.C. (2008). *Mafia y Co*. Bogotá, Colombia: Planeta.
- Gayraud, J.C. (2007). *El G9 de las mafias en el mundo. Geopolítica del crimen organizado*. Barcelona, España: Tendencias Editores.
- Gil, M. (2012). *Paramilitarismo y conflicto urbano. Relaciones entre el conflicto político-armado nacional y las violencias preexistentes en la ciudad de Medellín*. Tesis de Maestría en Ciencia Política no publicada. Medellín, Colombia.
- Giraldo, J. y Mesa, J. (2013). Reintegración sin desmovilización: el caso de las milicias populares de Medellín. En *Revista Colombia Internacional*, No 77, enero - abril 217-239
- Giraldo, J. (2008). Conflicto armado urbano y violencia homicida: el caso de Medellín. En *Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana*. No(5): pp 99-113.
- Hora trece (2013) *La banda "Los Triana" estaría detrás de muerte de reclamante de tierra*. Recuperado de: <http://www.hora13noticias.tv/index.php/generales/item/la-banda-los-triana-estaria-detras-de-muerte-de-reclamante-de-tierras>

- Hoyos, J. (2013). *De vuelta al barrio*. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/D/de_vuelta_al_barrio/de_vuelta_al_barrio.asp
- Infrarrojo (2012). *El pagadiario: la ruina de los pobres*. Recuperado de: www.youtube.com/watch?v=haY4LsmuQ_8
- Jaramillo, A. (1994). *Milicias populares en Medellín: entre la guerra y la paz*. Medellín, Colombia: Corporación Región.
- _____ (2012) Acerca de los estudios sobre conflicto armado y violencia en Medellín (1985-2009). En Giraldo, J. (Ed) *Economía criminal y poder político*. Medellín, Colombia: Eafit-Colciencias.
- Grupo de Memoria Histórica (2011). *La huella invisible de la guerra. Desplazamiento forzado en la Comuna 13*. Bogotá, Colombia. Imprenta Nacional. .
- Instituto Popular de Capacitación (2008). Bandas criminales detrás de conexiones ilegales de agua en terminales de buses. En *PRENSA MEDELLÍN 2008\IPC 2008\IPC 13-08-08Bandas criminales, detrás de conexiones ilegales de agua en terminales de buses.doc*, 13 de agosto.
- López, C. (Ed.) (2010). *Y refundaron la patria. De cómo mafiosos y políticos reconfiguraron el Estado colombiano*. Bogotá, Colombia: Corporación Nuevo Arco Iris.
- Martin, G. (2012). *Medellín: Tragedia y resurrección. Mafia, sociedad y Estado (1975-2012)*. Medellín, Colombia: Planeta.
- Medina F.G. (2006.) Una historia de las milicias de Medellín. Medellín, Colombia. Instituto Popular de Capacitación.
- Melo, J. (1994). *Hacia una política de convivencia: la experiencia de Medellín* En: Consenso, Recuperado de: <http://www.jorgeorlandomelo.com/bajar/convivenciam.pdf>
- Misse, M. (2009). Estado y mercados ilegales en Latinoamérica. Reflexiones a partir del concepto de mercancías políticas. ´ En: Giraldo, J. (Ed.) *Economía criminal y poder político*. Medellín, Colombia: Eafit-Colciencias.
- Observatorio de Seguridad Humana de Medellín (2011). *Control territorial y resistencias. Una lectura desde la seguridad humana*. Medellín, Colombia.
- Personería de Medellín (2011). *Informe sobre la situación de Derechos Humanos en Medellín. Primer semestre de 2011*. Medellín, Colombia.
- Restrepo, J.D. (2010). *Estructuras paramilitares desmovilizadas en Medellín: de la criminalidad a la fragmentación violenta*. Recuperado de: http://www.arcoiris.com.co/wp-content/uploads/2011/arcanos/revista_ARCANOS_15.pdf

- Salazar, A. y Jaramillo, A. (1992) *Medellín: las subculturas del narcotráfico*. Bogotá, Colombia: Cinep.
- Sánchez, G. y Meertens, D. (2006). *Bandoleros, gamonales y campesinos*. Bogotá, Colombia: El Áncora Editores.
- Secretaría de Seguridad (2013) Homicidios en Medellín. Alcaldía de Medellín.
- Sepúlveda, J.G. (2010). *Vivencias urbanas de paz*. Recuperado de: http://www.cidob.org/es/publicaciones/monografias/monografias/vivencias_urbanas_de_paz
- Perea, C. M. (2007). *Con el diablo adentro. Pandillas, tiempo paralelo y poder*. México: Siglo XXI:
- Restrepo y Franco (2012). '*Oficina de Envigado*':génesis, disputas y ciclos de reorganización de una empresa criminal. Documento inédito.
- Romero, M. (2003). *Paramilitares y autodefensas*. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y relaciones internacionales (Iepri). Universidad Nacional.
- Semana (2008). *Bandas roban agua y la revenden* revista semana 2008. <http://www.semana.com/on-line/articulo/bandas-roban-agua-revenden/94549-3>
- Tribunal Superior del Distrito Sala de Justicia y Paz, (13). Recuperado de: www.saladejusticiaypazmedellin.com/...sala/.../auto_bloque_cacique_nutibara.,_4_de_septiembre.
- Uribe, M.T. (1989). La territorialidad de los conflictos y la violencia en Antioquia. En: *Realidad Social*. Medellín, Colombia: Gobernación de Antioquia. Medellín (1)
- Verdad Abierta (2011). *El ocaso de la Corporación Democracia*, 11 de marzo. Recuperado de: <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/50-rearmados/3107-el-ocaso-de-la-corporacion-democracia>
- _____ (2013). Policía Nacional armó al Frente Capital: Alias Mi Sangre. Recuperado de: <http://www.verdadabierta.com/component/content/article/177-entrevista/4593-policia-nacional-armo-el-frente-capital-alias-mi-sangre/>
- Vélez, J.C. (2012). Conflicto y guerra, la lucha por el orden en Medellín. En: Espinal, Vélez y Pérez (Ed). *Ensayos sobre conflicto, violencia y seguridad ciudadana en Medellín*. Medellín, Colombia: Instituto de Estudios Políticos. Universidad de Antioquia.